

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO  
**CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**

Plaza Fontes, s/n  
Murcia

**SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA**

**ASUNTO:** Alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del tercer ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Doña Ana M<sup>a</sup> García Albertos, con DNI 22.474.855-Z, como Presidenta y actuando en representación de **Ecologistas en Acción de la Región Murciana**, con CIF: G-30.559.439, y con número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, 5.041/1<sup>a</sup>, con domicilio social y a efectos de notificación en **Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 - Bajo D - 30.003 MURCIA**, y teléfono 629 850 658, estando en consulta pública el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del tercer ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, formula las siguientes:

## **ALEGACIONES**

### **1. Sobre la forma en que se ha considerado el cambio climático**

El Tema Importante 10 está dedicado a la “Adaptación al Cambio Climático”. El diagnóstico que realiza el EPTI es muy insuficiente, ya que tan sólo presenta un análisis genérico de las previsiones del cambio climático, en su mayor parte a escalas superiores a la propia Demarcación del Segura, pero no analiza ni valora las iniciativas de adaptación al cambio climático en materia hídrica que se están llevando a cabo en la demarcación del Segura ni sus resultados, si es que se ha realizado alguna iniciativa.

Por otra parte el EPTI realiza una lectura muy benévola de la reducción de recursos hídricos que ya está teniendo lugar y que se agravará debido al cambio climático. El EPTI señala que *“En el PHDS 2015/21 ya se recogen los efectos del cambio climático a través de los trabajos de “Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural” elaborados por el CEDEX (Centro de estudios Hidrográficos CEH, 2012) para el estudio del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua de las demarcaciones españolas. A tenor de los valores obtenidos, se ha previsto en el plan una re-ducción de recursos del 5%*

*para el horizonte 2033, dejando el resto de horizontes previos sin cambios” (página 300 del EPTI).*

Frente a esta imagen, enormemente complaciente, los datos del informe del CEDEX elaborado en 2017) muestran que la reducción de los recursos hídricos es más intensa de lo que dice el EPTI y además dicha reducción ocurrirá sin esperar al año 2033. En concreto, una aplicación conservadora del principio de precaución llevaría a considerar, como mínimo, la reducción promedio de recursos hídricos en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 que estima el CEDEX en la cuenca del Segura, que es del 8 % en la periodo 2010-2040. Este periodo temporal se corresponde con el periodo 2010-2040, por lo que el periodo de vigencia del plan hidrológico del tercer ciclo, 2021-2027, se sitúa plenamente en dicha ventana temporal. En consecuencia, la reducción de recursos afecta de pleno al cálculo de los recursos hídricos del tercer ciclo. Pese a ello, el EPTI no ha reevaluado los recursos hídricos para el tercer ciclo incorporando dicha reducción del 8%. Además, la reducción mencionada para el año 2033 (5%) es incluso inferior a dicho valor medio del 8%. Esto constituye una grave irresponsabilidad, emite un mensaje contrario al necesario y dificulta que por parte de administraciones, agentes económicos, población y sociedad en su conjunto se tome en serio la imprescindible adaptación a los menores recursos hídricos que provocará – y está provocando ya – el cambio climático.

En definitiva, El EPTI no realiza un diagnóstico realista ni es coherente en relación con el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos en la demarcación del Segura. Tanto en la ficha de este Tema Importante como en las fichas de otros Temas Importantes, el EPTI reconoce que el cambio climático tiene un impacto directo en las aportaciones y por tanto en los recursos hídricos. Pese a ello, el EPTI no recalcula los recursos hídricos teniendo en cuenta la reducción que afecta ya a la ventana temporal de cambio climático en la que se inscribe el tercer ciclo de planificación y no analiza qué se ha hecho en materia de adaptación al cambio climático frente a la reducción de recursos hídricos, porque no se ha actuado si no se han adoptado medidas y, en el caso de que se hayan adoptado medidas, qué efectos han tenido. De ello se deduce que la consideración del cambio climático por parte del EPTI es meramente retórica.

Por otra parte resulta preocupante que el EPTI afirme que “La combinación del aumento de la temperatura y la disminución de los recursos hídricos dificultará la consecución de otros temas importantes como la restauración hidromorfológica y el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos” (página 301 de la Memoria del EPTI, el resaltado es nuestro), pero no señale igualmente que el cambio climático dificultará la atención a las demandas. Se trata de una priorización de facto de las demandas en general sobre los caudales ecológicos cuando, de acuerdo con la normativa vigente, los caudales ecológicos constituyen una restricción previa a la asignación de recursos a los distintos usos y demandas, a excepción del abastecimiento humano que ostenta la máxima prioridad. ¿Se pretende blindar las demandas frente a la reducción de recursos por el cambio climático, haciendo recaer el peso de dicha reducción sobre los caudales ecológicos y la restauración fluvial? Ello supondría subvertir lo establecido por la Ley de Aguas, que establece que los

caudales ecológicos han de garantizar la recuperación o mantenimiento de las especies, hábitats y comunidades ecológicas que habitan o podrían habitar el río y tienen el carácter de restricción previa frente a la asignación a los usos y demandas. En cuanto al análisis de alternativas para abordar el cambio climático, La alternativa 0 muestra que las principales actuaciones previstas en el plan vigente para hacer frente al cambio climático se refieren a medidas de incremento de la oferta de recursos hídricos, pero no a medidas de gestión de la demanda, las más eficaces para una adaptación efectiva a unos recursos hídricos decrecientes. Resulta obvio que las estrategias de incremento de la oferta de recursos hídricos fracasarán en un escenario de recursos decrecientes, sean pozos de sequía, más embalses o más trasvases, porque tales infraestructuras no conseguirán que haya más agua. La alternativa 1 se refiere a las medidas contempladas en la actualización del Plan Especial frente a la Sequía, que básicamente consisten en reducir los caudales ecológicos (contraviniendo su carácter de restricción previa a los usos de acuerdo con la Ley de Aguas) y en declarar el deterioro temporal de las masas, cosa que podría ser admisible en situaciones de sequía excepcional no previsible, pero no por razones de cambio climático, que constituye una situación perfectamente previsible y cuantificable, por lo que tal medida contraviene de forma flagrante la Directiva Marco de Aguas. Por el contrario, el EPTI no incorpora ni una sola medida de gestión de la demanda y en concreto de reducción del consumo en todos los usos, empezando por las demandas agrarias, que consumen en torno al 80% de los recursos disponibles en la demarcación del Segura.

Para reducir la vulnerabilidad de la población y del sistema socioeconómico frente a unos recursos hídricos decrecientes por el cambio climático, es necesario aplicar medidas que permitan una reducción general de las demandas hídricas. Estas medidas deben abarcar todos los tipos de demanda, muy particularmente las agrarias, que representan más del 80% del consumo total de agua en la Región de Murcia. Estas medidas deberían incluir la auditoría de todos los perímetros de regadío existentes; la sanción ejemplar de cuantos usos no autorizados de agua y superficies irregulares de regadío se detecten, obligando a la restitución del terreno a su uso anterior; la implantación de dobles circuitos en el suministro de agua en alta (aguas potables/no potables) y en baja (aguas grises/aguas negras); la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible; el incremento de los caudales ecológicos mínimos para unos ecosistemas fluviales más resilientes frente al cambio climático y la relajación de los criterios de garantía en la atención de las demandas a excepción del abastecimiento humano, especialmente en situaciones de sequía.

## **2. Sobre los caudales ambientales**

El Tema Importante 5 se dedica a la “Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos”.

### ***Análisis general***

La cuenca del Segura está sometida en general a una fortísima presión por uso y demanda del agua, principalmente debida al modelo agrícola, que hace que sus ecosistemas fluviales estén ya muy maltrechos. El propio resumen de esta ficha del EPTI reconoce que “En cuanto a la previsión del número de extracciones sobre masa de agua superficial y su volumen para el horizonte 2021, el vigente PHDS 2015/21 contempla el mantenimiento de la actual superficie agrícola y su demanda asociada. Por tanto el volumen de recursos superficiales destinado a su satisfacción se mantiene también constante en la planificación, lo que mantiene la dificultad para el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos establecidos”.

Este párrafo es un reconocimiento de que no se piensa cuestionar los usos del agua ya establecidos que están suponiendo una presión insostenible sobre muchas masas de agua. Por ejemplo, frente a la disminución del agua disponible por el cambio climático, lo que se plantea es una reducción paralela de los caudales ecológicos: “Es necesario considerar la posible incidencia de diversos escenarios de cambio climático sobre el patrón hidrológico de la demarcación, y por ende, sobre los regímenes ecológicos que se definan e implementen. (...) incluir el rango de disminución en el desarrollo de los estudios de definición de los regímenes de caudales ecológicos que se realicen, así como en los programas de implantación, seguimiento y control adaptativo”.

Esto obliga a recordar que los caudales ecológicos son una prioridad frente a los usos, tienen el carácter de restricción previa y su objetivo irrenunciable es mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados (Instrucción de Planificación Hidrológica). Estos planteamientos del EPTI van en contra de la legalidad y de la sostenibilidad.

La definición de los caudales ecológicos es todavía incompleta. De forma preliminar y tan solo con carácter informativo, en el PHDS 2015/21 se ha incorporado una primera estimación del caudal generador para 20 masas de agua y una tasa máxima de cambio en 11 masas de agua. Sin embargo no hay una explicación de por qué estos números, ni en qué masas es pertinente establecer caudales máximos, tasas de cambio y caudales generadores. Debemos recalcar que los caudales generadores, las tasas de cambio y la modulación estacional son componentes tan importantes como los caudales mínimos y están al mismo nivel de obligación normativa.

En cuanto al cumplimiento de los caudales ecológicos, su grado de control es aún muy deficiente, como reconoce el propio EPTI: se verifica en menos de un 20% de las masas de agua que tienen caudales mínimos establecidos. De las 77 masas de agua (81 tramos fluviales) en las que se ha establecido un régimen de caudales ecológicos mínimos, 15 cuentan con estación de control permanente, habiéndose detectado incumplimientos de los caudales ecológicos en 7 de ellas. Sin incluir las masas con características de ramblas semiáridas, quedarían en la actualidad un total de 46 masas sin control permanente del régimen de caudales ecológicos, lo que denota una falta importante de control foronómico.

Además, el EPTI no menciona que de estas 7 masas de agua de las que se han constatado los incumplimientos, 5 están dentro y representan hábitats fluviales de la Red Natura 2000 y otra está en el Inventario de Zonas Húmedas. Es especialmente grave que no se cumplan ni siquiera los caudales mínimos ecológicos en estos

tramos que deberían gozar de una protección avanzada y tienen especies y hábitats fluviales clave.

Finalmente, la consideración del cambio climático y su muy probable disminución del agua disponible debe ser una preocupación para el cumplimiento de los caudales ecológicos establecidos, ya que efectivamente el conflicto con los usos no hará sino agravarse muy probablemente, pero no puede utilizarse nunca como razón para rebajar estos caudales y con ellos sus objetivos ambientales. Los caudales ecológicos son una restricción previa a los usos, lo contrario va en contra de la legalidad y de la sostenibilidad. El cambio climático es una alteración de la naturalidad de los sistemas por causas antrópicas, la reducción de caudales que se prevé no puede ser considerada como una característica natural de los sistemas fluviales y utilizada para disminuir aún más los caudales mínimos ecológicos. De hecho sería deseable lo contrario: aumentar el margen de naturalidad de los ecosistemas acuáticos, incrementando los caudales mínimos, para aumentar su resiliencia frente a la amenaza de una mayor presión sobre unas masas de agua ya maltrechas.

### ***Problemáticas concretas sobre caudales ecológicos que requieren atención específica***

#### ***Caudal ecológico del río Taibilla***

Los caudales del río Taibilla están derivados en su práctica totalidad para abastecimiento, por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, lo que ha provocado su casi completa desecación y la inexistencia de un régimen de caudales ambientales adecuado. En el marco del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009-2015 se propuso un caudal mínimo de 365 l/s de media utilizando el método del hábitat potencial útil y adoptando el valor inferior que aportaba dicho método, de sólo el 30% de hábitat potencial útil. Pero es que además, posteriormente dicho caudal fue reducido al exiguo valor de 30 l/s, menos del 10% del caudal mínimo inicialmente propuesto. En definitiva, se está incumpliendo de forma flagrante con la obligación de respetar un régimen de caudales ecológicos en el río Taibilla, lo que supone un deterioro continuado de dicho río y un incumplimiento evidente de la Directiva Marco del Agua.

Esta drástica rebaja se justificó en su momento por la primacía del consumo urbano sobre la demanda ambiental, pero en el contexto de una gestión integrada de la cuenca, en la que existen otros recursos hídricos y otras demandas menos prioritarias, como las agrarias, este argumento no es aceptable. El caudal ecológico constituye una restricción previa y tiene un nivel de prioridad por encima de los usos, a excepción del abastecimiento. Existiendo usos distintos al abastecimiento que consumen el 80% del agua disponible en la cuenca, aceptar que el río Taibilla no tiene un caudal ecológico adecuado por la primacía del abastecimiento implica implícitamente que las demandas del resto de usos no prioritarios, en particular del regadío, no se cuestionan, lo que en la práctica supone situar dichos usos y en especial el regadío por encima del régimen de caudales ecológicos, lo que contraviene la Ley de Aguas y supone incumplir la Directiva Marco del Agua, porque

un río sin agua o casi sin agua de ninguna forma puede aspirar a recuperar un buen estado ecológico. Además, se pueden explorar otras opciones complementarias, como un cambio de toma de dichos caudales. En definitiva, el uso prioritario del abastecimiento se debe y puede garantizar gestionando las demandas de usos no prioritarios como los agrarios, a la vez que se salvaguardan los caudales ecológicos.

En cuanto a los municipios cuyo abastecimiento depende en exclusiva de los caudales del Taibilla, el volumen requerido es pequeño y en absoluto justifica el volumen captado.

Otro de los argumentos que se aducen se refiere a la calidad de las aguas, por la presencia de sulfatos en la toma de Ojós. Sin embargo existen otras alternativas, tanto de fuentes del recurso (incrementando los recursos procedentes de la desalación marina en áreas costeras e impidiendo la contaminación con sulfatos de las aguas del trasvase Tajo-Segura destinados a abastecimiento), como medidas relativas a la gestión diferencial o inteligente de la calidad del agua. Esta gestión diferencial de la calidad del agua, a través de una reordenación de los usos-demandas, permitiría un ajuste fino de las calidades requeridas por cada uso, evitando tanto los déficits de calidad como el uso de aguas de elevada calidad a usos que no la requieren. Por ejemplo, se deberían blindar todos los acuíferos con aguas de buena calidad todavía existentes (crecientemente amenazados por la contaminación agraria) exclusivamente para abastecimiento humano. No es de recibo que aguas de buena calidad en la cabecera de la cuenca se estén dedicando al regadío cuando, a la misma vez, existen municipios en dicho territorio que tienen problemas de abastecimiento o cuya única fuente de recursos es un exhausto río Taibilla. Estos municipios de cabecera deberían abastecerse con aguas subterráneas de alta calidad y estrictamente protegidas de fuentes contaminantes, incluyendo la contaminación difusa agraria.

Desde el punto de vista social, la captación casi total del Taibilla para el abastecimiento del conjunto de la cuenca forma parte de la considerable deuda ecológica y social que la cuenca en su conjunto tiene contraída con el territorio y los habitantes de la Cabecera de la cuenca. Devolverle al río Taibilla sus caudales constituye un paso imprescindible y urgente para ir reduciendo dicha deuda ecológica y social.

### *Caudal ecológico en el río Segura aguas abajo de presas de situadas en la cabecera de la cuenca*

#### *Caudal ecológico aguas abajo de la presa de Miller*

La presa hidroeléctrica de Miller altera de forma brusca y grave el caudal del río Segura aguas abajo de dicha presa en función de los objetivos de producción hidroeléctrica de la misma, lo que genera importantes impactos ecológicos, sociales y económicos:

- A nivel ecológico, el brusco aumento de caudal (las denominadas “seltas de agua”, arrastran las comunidades biológicas presentes en el río, dando lugar a un empobrecimiento muy considerable de las mismas. Esta es la razón que



explica que en este tramo de cabecera el río Segura no alcance un estado ecológico Muy Bueno y tenga tan sólo un estado ecológico Bueno.

- A nivel social, el incremento brusco de caudal, que además tiene lugar de forma imprevisible y en cualquier momento, constituye un serio peligro para los potenciales bañistas y usuarios del río. En la práctica esto supone que en estos tramos fluviales de la cabecera del Segura se ha privado a la población de su derecho ciudadano a disfrutar del río para usos recreativos, entregando casi en exclusiva los derechos sobre tales tramos a la presa hidroeléctrica. Esto ha generado un malestar creciente en las poblaciones locales que, con toda razón, exigen su derecho a poder bañarse y tener actividades recreativas en el río sin poner en peligro su vida.
- A nivel económico, la imposibilidad de ofertar actividades relacionadas con el río en condiciones de seguridad, e incluso la posibilidad de que los visitantes puedan bañarse de forma segura, limita considerablemente las posibilidades de un desarrollo ecoturístico en la comarca, agravando la deuda social y económica contraída con la misma.

Es por tanto prioritario establecer con la mayor urgencia un régimen de caudales ecológicos aguas abajo de la presa de Miller que fije y e implante realmente todos los componentes del régimen de caudales: valores mínimos, máximos, variación estacional, caudales generadores y muy especialmente, tasas de cambio, de forma que las liberaciones de caudal desde la presa se realicen de forma más lenta y pausada, evitando el arrastre de comunidades y el peligro para bañistas y usuarios del río.

#### *Caudal ecológico aguas abajo de la presa de La Vieja*

El río Zumeta, aguas abajo de la presa de La Vieja, en múltiples ocasiones presenta tramos secos o prácticamente secos, lo que constituye un claro deterioro de la masa de agua y un evidente incumplimiento de la Directiva Marco del Agua. La inexistencia de caudales adecuados en el río Zumeta ha generado el consiguiente malestar de la población local, que con toda razón demandan que se garantice un caudal ecológico para el río Zumeta.

Por tanto, es urgente establecer y garantizar un adecuado régimen de caudales ecológicos en el río Zumeta aguas abajo de la presa de La Vieja, incluyendo caudales mínimos y el resto de componentes de los caudales ecológicos.

#### *Caudal ecológico aguas abajo de la presa de Anchuricas*

Por las razones ya señaladas, debe igualmente fijarse e implantare un adecuado régimen de caudales en el río Segura aguas abajo de la presa de Anchuricas, que garantice el mantenimiento del Buen Estado de la masa de agua, a la vez que se atienden las justas demandas de la población local.

#### *Caudal ecológico del río Mula*

El río Mula carece de un régimen de caudales ecológicos, que ha de ser definido e implantado con la mayor urgencia para recuperar y mantener el buen estado de esta masa de agua. Además, la degradación continuada del río Mula por la afección a

sus fuentes debido a las extracciones crecientes para regadío y por la inexistencia de caudales ecológicos adecuados, ha generado una legítima reacción de la población local, que demandan la recuperación ecológica del río Mula y la garantía de un régimen de caudales ambientales que realmente asegure su recuperación.

Ligado a lo anterior, hay que señalar la necesidad de compatibilizar la necesidad de llevar a cabo el monitoreo de los caudales en el río Mula con la obligación de no deteriorar los tramos fluviales con la construcción de estaciones de aforo de obra que suelen generar impactos ambientales de distinta entidad a los ríos, especialmente en tramos situados en masas protegidas o de interés natural. Para ello existen distintas alternativas técnicas ampliamente utilizadas, como se señala en el apartado siguiente.

#### *Uso de técnicas hidrométricas de control de caudales de bajo impacto*

En cauces naturales y muy especialmente en tramos fluviales situados en Red Natura 2000, Reservas Naturales Fluviales, otros espacios protegidos y parajes de interés natural, el control y seguimiento de los caudales debería llevarse a cabo a través de técnicas hidrométricas con el mínimo impacto posible en el medio. Estas técnicas incluyen el uso de sensores de presión o la tecnología radar, que permite medir la velocidad, nivel y caudal de agua sin contacto con el agua y registrar los datos vía web, etc.

### **3. Sobre la contaminación difusa agraria**

La contaminación difusa agraria es objeto del TI.2 “Contaminación difusa por nitratos y otros”, pero aparece también en el TI1. “Explotación sostenible de masas de agua subterráneas”.

Según el EPTI, 27 masas superficiales y 20 masas subterráneas presentan contaminación por nitratos, una cifra superior a la identificada en el plan vigente (página 152 de la Memoria del EPTI). Por tanto, la contaminación por nitratos ha aumentado en el conjunto de la demarcación, lo que demuestra que no se han aplicado medidas eficaces para evitarlo. Las aguas subterráneas del Campo de Cartagena, muy contaminadas por el regadío intensivo, constituyen una de las situaciones más graves, pero la contaminación agraria se extiende a otros muchos acuíferos y está alcanzando ya a los acuíferos del Noroeste, que hasta hace poco mantenían una excelente calidad del agua y que se debían haber blindado para abastecimiento humano. Entre otras situaciones graves, hay que destacar el caso del acuífero “Bajo Quípar”, en los términos municipales de Bullas y Cehegín, con niveles de nitratos que cuadruplican el máximo legal. Otros acuíferos del Noroeste, así como algunas fuentes y manantiales, están mostrando ya claros síntomas de contaminación por nitratos, debido al imparable avance de nuevos regadíos intensivos en la cabecera de la cuenca y en la Comarca del Noroeste. A pesar de todo ello, el EPTI no detalla qué medidas de las previstas se han aplicado, las razones por las que el resto no se han puesto en marcha, así como las razones por las que las medidas aplicadas - si las hubiere - han sido ineficaces para, al menos, detener el incremento de la contaminación difusa agraria.



En el diagnóstico que el EPTI realiza de las causas generadoras de este problema, se evidencia un intento de exculpación de las actividades agrarias como responsables de una contaminación claramente incompatible con la Directiva Marco del Agua, aludiendo a una supuesta necesidad productiva en la que dicha actividad contaminante es prácticamente inevitable, lo que constituye un juicio más que discutible y en todo caso gratuito en el diagnóstico de las causas del problema y en relación con la responsabilidad del organismo de cuenca de impedir dicha contaminación. En segundo lugar, atribuye como causa complementaria a dicha contaminación la ausencia de redes de drenaje y tratamientos de los retornos agrícolas, lo que de nuevo pretende exculpar al sector responsable de la contaminación (las actividades agrarias) situando dicha responsabilidad en acciones ajenas al mismo, como son supuestas obras y tratamientos de los drenajes, sin aportar más detalles acerca de qué obras y tratamientos en concreto se trata, qué experiencias demuestran su eficacia en contaminación difusa y quién sería responsable de su financiación.

Por otra parte, en el apartado del análisis de las presiones generadoras de estos impactos, El EPTI zanja la cuestión relativa al regadío (el principal responsable de la contaminación agraria) con un breve párrafo destinado a glosar las bondades económicas del regadío productivo y tecnificado, en contraposición a los regadíos tradicionales, en los que "a pesar de los esfuerzos realizados", persisten sistemas tradicionales de riego. Resulta inaudito que bajo el epígrafe "Sectores y actividades generadoras de las presiones", encontremos referencias gratuitas al empleo creado o a las bondades de la modernización de regadíos, además de menospreciar a los regadíos históricos, pero no haya ni una sola frase relativa a los causantes de las presiones de este tema importante, es decir, a cómo o porqué el regadío sigue contaminando con nitratos y pesticidas, tras 20 años de aplicación de la DMA.

Este breve párrafo incluido como análisis de las presiones generadoras, también resume de forma magistral dos objetivos subyacentes que impregnan el EPTI, así como el conjunto de la planificación hidrológica y gestión del agua en la Demarcación del Segura: 1º) un apoyo permanente al regadío intensivo, asumiendo la necesidad de la plena satisfacción de sus demandas y manifestando una actitud de plena comprensión de su actividad contaminante como un mal menor inevitable; 2º) la consideración de los sistemas de riego tradicional como sistemas obsoletos a eliminar. Sólo desde una fijación obsesiva con estos dos objetivos, los cuales recorren el conjunto del EPTI, se entiende la introducción de párrafos como el que se acaba de exponer bajo epígrafes que nada tienen que ver.

En relación con la contaminación difusa agraria en el caso del Campo de Cartagena, hay que señalar que la entrada de nutrientes (nitrógeno y fósforo) a la laguna del Mar Menor procede básicamente de las actividades agrarias (MAGRAMA, 2015). La cuantificación de esta entrada incluida en el EPTI no es correcta. La estima de aportes de nitratos a la laguna del Mar Menor que señala el EPTI considera sólo la descarga subterránea, obviando los flujos superficiales, cuyo valor estimado es cuatro veces mayor respecto al subterráneo. En efecto las aportaciones superficiales son unos 35-40 Hm3 anuales de aportaciones superficiales, según la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Vertido Cero, frente a 8,5 Hm3 anuales de entrada subterránea, según Tragsatec, 2020). Por tanto, la entrada total de nitratos a la

laguna del Mar Menor es como mínimo 4-5 veces superior a la cifra aportada en el EPTI (1.464 toneladas anuales), situándose más bien en el entorno de las 6.500 toneladas anuales de nitratos.

El plan vigente estableció Objetivos Menos Rigurosos (OMR) por contaminación con nitratos y plaguicidas en 8 masas, extensión de objetivos a 2027 en 11 meses y extensión a horizontes posteriores en otras 2. En el Campo de Cartagena, el OMR a 2027 es 200 mg/l, cuando la media actual, al menos en la franja cercana al Mar Menor, es de 148 mg/l (Tragsatec, 2020). Por tanto, el establecimiento de tales OMR no sólo no supone una mejora respecto de la situación actual en los acuíferos del Campo de Cartagena sino que permitiría un deterioro adicional, lo que incumple de modo flagrante la DMA. Además, estos objetivos menos rigurosos y extensiones temporales se han establecido sin acreditar que se han aplicado todas las medidas posibles para revertir la situación y sin justificar con los estudios científico-técnicos apropiados y un análisis coste-efectividad de las distintas alternativas, que conseguir los objetivos ambientales en 2027 incurra en costes desproporcionados. Este análisis se debería realizar teniendo en cuenta todos los costes, incluyendo los costes públicos y privados de mantener el acuífero contaminado (costes públicos, al contribuir al mal estado ecológico de la laguna del Mar Menor y costes privados por daños a terceros, en concreto en el sector turístico y el pesquero).

Por otra parte, también resulta preocupante que el EPTI no analice específicamente la contaminación por nitratos y plaguicidas procedentes de los usos agrarios que está afectando de forma creciente a las fuentes de agua para abastecimiento humano. En la Comarca del Noroeste muchos manantiales, que hasta hace poco tiempo tenían una calidad excelente, presentan ahora contaminación por nitratos, lo que los hace inservibles para abastecimiento humano y supone un daño a terceros con derechos ancestrales y una inadmisible afección del regadío a un uso totalmente prioritario como es el abastecimiento. La contaminación agraria difusa está afectando también a los pozos municipales de abastecimiento, como los de Caneja y el de los Royos, en el término de Caravaca. Además, la contaminación de las fuentes de agua para abastecimiento obliga a nuevas infraestructuras para traer el agua de más lejos y a más tratamientos, todo lo cual encarece el precio del agua, incrementa el gasto energético, reduce su calidad y seguridad para la salud pública, crea impactos ambientales adicionales debido a las nuevas infraestructuras de captación y transporte necesarias y a los nuevos tratamientos y quiebra la equidad social entre usuarios, ya que en este caso quien contamina es el regadío pero quien paga la factura es el usuario urbano y los usuarios tradicionales de los manantiales contaminados por nitratos. En territorios como el Altiplano, donde los acuíferos locales son la fuente de abastecimiento urbano, la contaminación agraria supone una grave amenaza, frente a la que el EPTI no hace referencia alguna.

En relación con la contaminación difusa agraria en el caso del Campo de Cartagena, hay que señalar que la entrada de nutrientes (nitrógeno y fósforo) a la laguna del Mar Menor procede básicamente de las actividades agrarias. La cuantificación de esta entrada incluida en el EPTI no es correcta. La estima de aportes de nitratos a la laguna del Mar Menor que señala el EPTI considera sólo la descarga subterránea, obviando los flujos superficiales, cuyo valor estimado es cuatro veces mayor respecto al subterráneo. En efecto las aportaciones superficiales son unos 35-40

Hm<sup>3</sup> anuales de aportaciones superficiales, según la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Vertido Cero, frente a 8,5 Hm<sup>3</sup> anuales de entrada subterránea, según el estudio de Tragsatec presentado en marzo de este año y disponible en la web del MITECORD. Por tanto, la entrada total de nitratos a la laguna del Mar Menor es como mínimo 4-5 veces superior a la cifra aportada en el EPTI (1.464 toneladas anuales), situándose más bien en el entorno de las 6.500 toneladas anuales de nitratos.

El plan vigente estableció Objetivos Menos Rigurosos (OMR) por contaminación con nitratos y plaguicidas en 8 masas, extensión de objetivos a 2027 en 11 meses y extensión a horizontes posteriores en otras 2. En el Campo de Cartagena, el OMR a 2027 es 200 mg/l, cuando la media actual, al menos en la franja cercana al Mar Menor, es de 148 mg/l (Tragsatec, 2020). Por tanto, el establecimiento de tales OMR no sólo no supone una mejora respecto de la situación actual en los acuíferos del Campo de Cartagena sino que permitiría un deterioro adicional, lo que incumple de modo flagrante la DMA.

Por otra parte, también resulta preocupante que el EPTI no analice específicamente la contaminación por nitratos y plaguicidas procedentes de los usos agrarios que está afectando de forma creciente a las fuentes de agua para abastecimiento humano. En la Comarca del Noroeste muchos manantiales, que hasta hace poco tiempo tenían una calidad excelente, presentan ahora contaminación por nitratos, lo que los hace inservibles para abastecimiento humano y supone un daño a terceros con derechos ancestrales y una inadmisibles afección del regadío a un uso totalmente prioritario como es el abastecimiento. La contaminación agraria difusa está afectando también a los pozos municipales de abastecimiento, como los de Caneja y el de los Royos, en el término de Caravaca. Además, la contaminación de las fuentes de agua para abastecimiento obliga a nuevas infraestructuras para traer el agua de más lejos y a más tratamientos, todo lo cual encarece el precio del agua, incrementa el gasto energético, reduce su calidad y seguridad para la salud pública, crea impactos ambientales adicionales debido a las nuevas infraestructuras de captación y transporte necesarias y a los nuevos tratamientos y quiebra la equidad social entre usuarios, ya que en este caso quien contamina es el regadío pero quien paga la factura es el usuario urbano y los usuarios tradicionales de los manantiales contaminados por nitratos. En territorios como el Altiplano, donde los acuíferos locales son la fuente de abastecimiento urbano, la contaminación agraria supone una grave amenaza, frente a la que el EPTI no hace referencia alguna.

En cuanto a las medidas previstas, se trata en general de acciones cuya eficacia está por demostrar y que vienen repitiéndose en distintos documentos de planificación, como declaración de nuevas Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos (con programas de actuación débiles y basados en general en medidas voluntaria o meramente burocráticas), dosis máximas de fertilizantes y labores de inspección y divulgación, medidas que hasta la fecha han sido incapaces de reducir los problemas de contaminación difusa agraria, que sigue aumentando. Por otra parte, resulta muy sorprendente la lista de medidas para afrontar la contaminación por pesticidas, las cuales se reducen a vagas referencias a la normativa vigente (incluir la lista de plaguicidas prohibidos en los códigos de buenas prácticas

agrarias), divulgación y medidas de vigilancia, pero no incluyen medidas eficaces de obligado cumplimiento en el sector agrario.

Las medidas planteadas por el EPTI son completamente insuficientes para revertir de forma eficaz la creciente contaminación difusa agraria. La extensión creciente en la Demarcación del Segura de la contaminación difusa agraria por nutrientes y pesticidas, los impactos ambientales y sobre la salud humana que ello ocasiona, el deterioro de las masas de agua, el colapso ecológico de ecosistemas de gran valor como el Mar Menor, los impactos sociales y económicos que ello genera, el procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España por incumplir la Directiva de Nitratos y los riesgos crecientes de incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, exigen un plan con medidas eficaces a corto y largo plazo en la que es imprescindible la actuación coordinada de la Confederación Hidrográfica del Segura y de las administraciones autonómicas implicadas. Este plan debería contemplar la reducción en origen de la contaminación agraria a través de actuaciones a escala de explotación agraria, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza a escala de la matriz del paisaje agrario y la recuperación y la generación o ampliación de superficies de humedal natural en lugar apropiados, por su demostrada capacidad para retener y eliminar nutrientes a escala de la cuenca o sistema agrario.

Con respecto a la reducción en origen de la contaminación agraria con actuaciones a escala de explotación agraria, se han de establecer valores límite de obligado cumplimiento y más exigentes respecto a la normativa actual, no sólo en la aportación de fertilizantes sino también en los contenidos en nutrientes de los lixiviados a escala de parcela o explotación agraria. Igualmente debe establecerse de forma obligatoria sistemas de ciclo cerrado en los invernaderos, norma existente en otros países como Holanda. A escala de parcela agraria y del conjunto del sistema agrario, es necesario implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza, en particular las denominadas Medidas Naturales de Retención de Agua (NWRM, [www.nwrm.eu](http://www.nwrm.eu)). Una de tales medidas es establecer setos verdes de vegetación natural con especies autóctonas especialmente adecuadas para la interceptación de los flujos de nutrientes. Este tipo de acciones aparecen ya en las denominadas medidas agroambientales, con un carácter voluntario y consisten en dedicar al menos un 5% de la superficie de la explotación agraria a vegetación natural y sistemas de alto valor ambiental. Se propone que esta medida, reorientada hacia la retención de nutrientes y reducción de la contaminación difusa, se aplique de forma obligatoria en todas las zonas agrarias declaradas como Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos. Otras soluciones basadas en la naturaleza que son urgentes incluyen el deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico y la revegetación de los cauces y red de drenaje con especies propias de estos sistemas, como zona-tampón que contribuye a retener nutrientes y a reducir escorrentías y sedimentos procedentes de zonas agrícolas, reduciendo así los daños de las inundaciones. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza no sólo han demostrado su eficacia a la hora de retener y eliminar los nutrientes procedentes de la contaminación agraria, sino que aportan además múltiples beneficios adicionales, como retener el suelo y reducir las escorrentías, disminuyendo los daños por inundaciones, mejorar la calidad del paisaje y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad. También es necesario aplicar el principio de quien contamina paga a

las actividades agrícolas y ganaderas. Dicha tasa debería modularse en función de distintos factores ambientales y socioeconómicos, incluyendo su exención total en el caso de la agricultura ecológica y los secanos extensivos tradicionales.

#### **4. Sobre las aguas subterráneas**

Dos fichas analizan el problema de las aguas subterráneas: T.I. 1. “Explotación sostenible de masas de agua subterráneas” y T.I.9. “Sobreexplotación de acuíferos Sureste de Albacete y, Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia”. No se entiende muy bien la razón de dividir el problema de la sobreexplotación de acuíferos, que es lo que se aborda, en dos fichas, especialmente teniendo en cuenta que los diagnósticos y medidas contempladas en las alternativas son muy similares. En lo que sigue se analizan y valoran de forma conjunta los contenidos de ambas fichas.

##### ***Sobre el diagnóstico***

El EPTI acierta al identificar la sobreexplotación de aguas subterráneas como uno de los principales problemas de la cuenca, al cual dedica los temas importantes 1 y 9, si bien hubiera sido preferible un análisis más integrado en un único tema importante. Pese a que ambas fichas incluyen una descripción extensa del estado actual de las masas subterráneas, existen carencias importantes en el diagnóstico, de las que se destacan las siguientes:

##### ***i) Carencias en la información disponible sobre aguas subterráneas***

Pese a su capital importancia en la demarcación del Segura, se sigue arrastrando un grave problema en cuanto a la cantidad y calidad de la información disponible sobre aguas subterráneas y su acceso público, especialmente en relación con los usos, dado el muy insuficiente control existente sobre los pozos y extracciones reales: número real de pozos existentes, volumen total de extracciones, destino final de las aguas, etc.

##### ***ii) Ausencia de una evaluación y valoración crítica del fracaso de las medidas adoptadas hasta la fecha***

Pese a que el mal estado de las aguas subterráneas constituía ya un problema identificado en el ETI del segundo ciclo, la situación no sólo no ha mejorado sino que el número de masas en mal estado ha aumentado. Pese a ello, no se realiza una evaluación de las medidas contempladas en el plan vigente para atajar la sobreexplotación de los acuíferos y sus impactos. Dicha evaluación debería haber valorado tanto el grado de ejecución de tales medidas como el grado en que las medidas ejecutadas han contribuido a resolver el problema.

##### ***iii) Ausencia de un análisis de la relación entre expansión del regadío y sobreexplotación de acuíferos***

El EPTI ignora o pasa de puntillas sobre la relación directa entre expansión del regadío y sobreexplotación de acuíferos, pese a la abrumadora existencia de evidencias de dicha relación directa causa-efecto. De hecho, el uso mayoritario de



las aguas subterráneas es el regadío y la expansión de los regadíos de las últimas décadas se ha basado, en buena parte, en un incremento de la explotación de aguas subterráneas, especialmente en zonas de cabecera de la cuenca, en el Noroeste murciano, que presenta todavía acuíferos con reservas importantes y más recientemente en la comarca del Altiplano, donde la ampliación de regadío intensivos ha agravado el histórico problema de sobreexplotación existente en la zona.

Una parte de las nuevas extracciones se lleva a cabo por parte de empresas agrarias que han implantado regadíos industriales en zonas previamente ocupadas por secano (y en algunos casos por vegetación natural), a pesar de que el plan vigente, como los anteriores, prohibían con carácter general la creación o ampliación de regadíos. El EPTI, en lugar de identificar a estas nuevas superficies de regadío como las responsables directas de la sobreexplotación de acuíferos y de su imparable incremento, hace menciones genéricas o señala otros factores, como la sequía. Como otro ejemplo del absoluto desinterés por un análisis detallado de los sectores responsables de la sobreexplotación, el tema importante 9 (sobreexplotación del Sureste de Albacete, Altiplano Murciano y Noroeste Murciano), dedica 10 páginas a la situación de las masas afectadas por sobreexplotación (estado, presiones e impactos), pero despacha el análisis de los sectores y actividades generadoras de las presiones en 9 escasas líneas.

#### iv) Ausencia de un análisis de los pozos ilegales y extracciones no autorizadas

Pese a las evidencias de la existencia de numerosos pozos ilegales y de extracciones de aguas subterráneas por encima de las autorizadas, el EPTI ignora por completo este grave problema de desgobierno generalizado y falta de control en la gestión de aguas subterráneas. Esta desgobierno genera enormes dudas acerca del volumen de aguas subterráneas realmente extraído, lo que erosiona la confianza en los balances hídricos subterráneos que se aportan y, sobre todo, impide tener confianza en la eficacia de las posibles medidas que se pudieran poner en marcha, ya que los usos no autorizados de aguas subterráneas, por su carácter ilegal, quedarían al margen de tales medidas de control.

Por ejemplo, según el EPTI se controlan con contadores volumétricos el 84% de los volúmenes sujetos a concesión en la demarcación (las concesiones de más de 500.000 m<sup>3</sup> anuales) y tales contadores registran un caudal bombeado que no alcanza ni a la mitad del volumen que tenían concedido (página 284 del EPTI). Semejante discrepancia genera enormes dudas acerca de la fiabilidad de la información aportada. Además, los contadores obviamente no registran los bombeos de los miles de pozos ilegales existentes en el conjunto de la cuenca. El EPTI, no analiza las razones de esta discrepancia, limitándose a señalar que "sería necesario llevar a cabo en paralelo una revisión de los derechos actuales, pudiéndose contemplar la asignación de una menor dotación hídrica de detectarse que el objeto de la concesión puede ser ejercido con un volumen inferior" (página 284 de la memoria del EPTI). Sin embargo, esta posibilidad de revisión a la baja de las concesiones no aparece concretada como medida específica en ninguna de las alternativas.



v) inexistencia de acceso ciudadano a los datos de extracciones y cartografía de todos los pozos existentes

En la actualidad es verdaderamente difícil que los ciudadanos puedan verificar la legalidad o no de una determinada extracción de agua y que desde la Confederación Hidrográfica se confirme al ciudadano el estado de legalidad de dicha extracción, según la información disponible en los catálogos y registros del Organismo de Cuenca, a partir de datos fácilmente obtenibles por el ciudadano como las coordenadas de los pozos y puntos de extracción.

Esta extrema dificultad en verificar el estatus jurídico de los pozos y puntos de extracción facilita las situaciones irregulares y deja en una posición de indefensión a los ciudadanos y entidades, en su imprescindible labor de corresponsabilidad a la hora de velar por el cumplimiento de las normativas e instrumentos de planificación y gestión vigentes en materia de aguas en la Demarcación del Segura. El EPTI no hace referencia alguna a estas dificultades para el acceso ciudadano a los datos disponibles sobre los pozos y extracciones subterráneas.

vi) Ausencia de un diagnóstico de la pérdida paulatina de manantiales y humedales por la sobreexplotación de aguas subterráneas

Buena parte de los manantiales y humedales asociados a las aguas subterráneas de la cuenca del Segura han sufrido procesos de desecación, reducción de caudales y degradación general de sus condiciones ambientales. Los manantiales, que constituyen la salida natural de los flujos de agua subterránea, tienen una función socioeconómica y ambiental de la máxima importancia, especialmente en una cuenca como la del Segura, donde buena parte del territorio presenta condiciones áridas y semiáridas y en la que el uso sostenible de los manantiales ha sido fundamental para los asentamientos humanos y los aprovechamientos tradicionales. A ello se añade que los manantiales representan una de las funciones ambientales más importantes de las aguas subterráneas, pues son estas salidas naturales de los acuíferos las que dan lugar al mantenimiento de ecosistemas ligados al agua y de los valores asociados de mantenimiento de la biodiversidad y del paisaje. Sin embargo, el EPTI apenas hace referencia a este grave problema de reducción y desaparición de fuentes y manantiales y a sus impactos ecológicos (eliminación de ecosistemas fontinales, humedales y biodiversidad asociada) y sociales (impactos socioeconómicos en los pequeños regadíos tradicionales que dependen de estas fuentes y manantiales).

Es necesario insistir en que la recuperación y conservación de los manantiales es incompatible no sólo con el descontrol de las extracciones de aguas subterráneas sino también con la política de la Confederación Hidrográfica del Segura de considerar preferible ubicar nuevas extracciones en acuíferos no sobreexplotados (por ejemplo pozos de sequía) antes que en acuíferos sobreexplotados. Muy al contrario, la sobreexplotación inicial de un acuífero y los primeros descensos en los niveles piezométricos concentran los máximos impactos ambientales, al afectar a manantiales, humedales y biodiversidad asociada. Por ello es claramente preferible ubicar nuevas extracciones (por ejemplo pozos de sequía) en el caso de que sean imprescindibles por razones extraordinarias (como una sequía excepcional) y de interés público superior (abastecimiento humano) en acuíferos ya sobreexplotados,

donde una bajada adicional de los niveles piezométricos apenas ocasionará impactos ambientales adicionales, antes que en acuíferos no sobreexplotados, donde tales impactos serán muy considerables.

### ***Acerca del análisis de alternativas***

Llama la atención que la hipótesis de partida para identificar el rango de posibles medidas de la alternativa 0 en ningún caso contempla una reconsideración de los usos y demandas existentes (algunas claramente irregulares), sino que el mantenimiento íntegro de tales demandas constituye un requisito previo no sujeto a discusión. Los planes hidrológicos de la cuenca del Segura (plan de 1998, plan del primer ciclo y plan del segundo ciclo) vienen externalizando las soluciones a los problemas de sobreexplotación y déficit hídrico, mayoritariamente creados por la expansión del regadío, sobre esta misma hipótesis de partida de no tocar las demandas.

No es aceptable que, veinte años más tarde, los acuíferos sobreexplotados sigan sin tener planes de ordenación, lo que beneficia a los usuarios que han sobreexplotado el acuífero, en general nuevos regadíos intensivos, que además siguen operando pese a la situación de sobreexplotación, a costa de los usuarios tradicionales, como los pequeños regadíos históricos de manantial, cuya viabilidad está amenazada por el fuerte descenso e incluso desaparición de los caudales de fuentes y manantiales debido a la sobreexplotación del acuífero.

Tras 20 años aplicando la DMA, es evidente que ya se sabía que era necesario revertir las tendencias negativas en el estado cuantitativo de los acuíferos. Ha habido tiempo mas que suficiente de considerar qué alternativas hay para ello en cada territorio y cuáles son los costes de cada opción. Se debería haber realizado un análisis espacialmente desagregado y con datos de calidad, para identificar:

- i) los usos no autorizados, que deben eliminarse sin contabilizar su coste económico privado y que a nivel público deberían suponer un ingreso en la forma de sanciones
- ii) los usos legalmente amparados por un derecho, para los que se debería hacer una estimación realista del coste real de reducir el uso de aguas subterráneas teniendo en cuenta otras opciones, como la sustitución con recursos de desalación marina en zonas costeras o la reducción de cultivos.

Por otra parte, según el EPTI las medidas incluidas en la alternativa 1 no permitirían resolver la sobreexplotación de los acuíferos del sureste de Albacete y del Altiplano murciano (Yecla y Jumilla), que según el EPTI suman unos 95 Hm<sup>3</sup>. En los acuíferos del sureste de Albacete las extracciones representan el 249% de los recursos renovables disponibles (según los datos del EPTI, página 279 de la memoria), mientras que en el Altiplano murciano dicho valor se eleva al 391% (página 280 de la memoria). Para resolver la sobreexplotación en ambas zonas el EPTI señala la necesidad de medidas adicionales, que identifica con la aportación de nuevos recursos externos. En este caso siguen considerando como hipótesis de partida el mantenimiento de todos los usos agrarios actuales porque consideran un "coste desproporcionado", sin más justificación técnica, la reducción de las demandas agrarias en estas zonas. No se entiende cómo es posible que se asuma de forma

acrítica el mantenimiento de tales demandas, responsables de extraer entre tres y cuatro veces los recursos disponibles, sobre todo teniendo en cuenta que estas zonas incluyen grandes extensiones de nuevos regadíos intensivos, muchos de ellos realizados en los últimos años, creados al margen de la normativa vigente en materia de aguas o a nivel ambiental y que tales nuevos regadíos son responsables directos de la sobreexplotación de los acuíferos o de su agravamiento.

Frente a las débiles medidas contempladas, se echa en falta considerar otras que, pese a tener un elevado potencial para contribuir a la reducción de la sobreexplotación de acuíferos, ni siquiera son mencionadas. Estas medidas se centran fundamentalmente en el control de la demanda agraria, que es la fuerza motriz principalmente responsable de las graves presiones sobre los acuíferos. El EPTI tan sólo hace una tímida referencia a alguna medida de gestión de la demanda cuando señala, como mera posibilidad sin mayor análisis de detalle, que se podría *"contemplar la asignación de una menor dotación hídrica en caso de detectarse que el objeto de la concesión puede ser ejercido con un volumen inferior"* (página 134 y página 293 de la memoria del EPTI). Una alternativa completa de medidas de gestión de la demanda está totalmente ausente del plan actual y del EPTI propuesto, pese a que podría ser enormemente eficaz para reducir sustancialmente la sobreexplotación con un coste público moderado. Estas medidas deberían incluir, entre otras, las siguientes:

- Auditoría de todas las superficies de regadío existentes, con indicación de la localización espacial del regadío, usuarios beneficiarios, origen de los recursos hídricos utilizados y situación legal y administrativa de los derechos de agua.
- Puesta a disposición pública de toda la información del punto anterior a través de una base de datos de acceso público, incorporando cartografías por geovisor para facilitar dicho acceso.
- Eliminación de todos los usos del agua cuyos derechos no estén plenamente conformes con la normativa vigente, incluyendo la eliminación de los regadíos que dependen de tales usos no autorizados de agua.
- Extender la instalación de caudalímetros a todos usuarios del agua, incluyendo todos los regadíos, tanto superficiales como subterráneos.
- Revisar la normativa en materia de sanciones por usos no autorizados del agua, con el fin de endurecer las sanciones en caso de incumplimiento para que realmente tenga un efecto disuasorio, puesto que en la actualidad en la mayoría de los casos las sanciones tienen un valor muy bajo en comparación con el beneficio económico del uso no autorizado del agua.
- Habilitar el acceso ciudadano a la base de datos, con geolocalización, sobre captaciones subterráneas de agua, que incluya localización de cada pozo, beneficiario, volumen máximo autorizado y destino de las aguas.
- Es necesario un análisis, tanto global como individualizado, de la situación actual de las fuentes y manantiales, así como de los humedales asociados a las aguas subterráneas, para detectar las causas y responsables concretos de cada situación de degradación, agotamiento o reducción de caudales, con el fin de implementar las medidas específicas necesarias para su recuperación, contando con la corresponsabilidad de los causantes de dicha

situación. En este sentido, debe priorizarse la utilización del agua de los acuíferos en todo lo posible a través de fuentes, manantiales y surgencias naturales. Esta prioridad no aparece ni en el plan vigente ni en el EPTI, que traslada los déficits de un determinado acuífero a todos los usuarios, con independencia de que se trate de un pozo, una galería o un manantial y sin tener en cuenta que los manantiales y surgencias naturales cumplen unas funciones ambientales insustituibles de las que carecen los pozos, además de acreditar un uso tradicional y sostenible a lo largo de un periodo de tiempo mucho mayor que el de cualquier pozo y, por tanto, han de ser priorizados y objeto de derechos especiales y salvaguarda con respecto a otro tipo de usos de las aguas subterráneas.

## 5. Sobre la gestión de riesgo de inundación

### Sobre el diagnóstico

El EPTI presenta un resumen muy genérico de lo dispuesto en otros instrumentos normativos y de planificación, especialmente el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, pero que en absoluto se puede considerar un diagnóstico adecuado, por presentar graves carencias, como las siguientes:

- i) No hace referencia alguna a las obras de defensa de avenidas contenidas en el Plan Hidrológico vigente, su grado de implementación y la medida en que han contribuido o no a la mitigación del riesgo de avenidas.
- ii) No realiza un análisis crítico del Plan de Defensa frente a Avenidas de la cuenca del Segura, construido en la década de los años 80 y el papel que ha tenido en las inundaciones sufridas a raíz de la DANA de septiembre de 2019, especialmente el encauzamiento del río Segura y el incremento del volumen y velocidad del flujo de agua exportado a la Vega Baja, el cual con toda probabilidad ha contribuido a aumentar los daños ocasionados por las inundaciones de septiembre de 2019 en la Vega Baja.
- iii) No analiza ni hace apenas referencia a las inundaciones sufridas a raíz de la DANA de septiembre de 2019, el grado en que las áreas inundadas coinciden con la Cartografía de Zonas Inundables, el modo en que se gestionó dicho episodio de inundaciones y las causas específicas de los distintos problemas de inundación sufridos, especialmente en las vegas Media y Baja. En concreto, no se indica si se ha evaluado y revisado dicha Cartografía a la luz de la experiencia de la DANA de septiembre de 2019, dado que existen evidencias de que hay zonas que se inundaron y que no aparecen en dicha Cartografía como áreas con riesgo elevado de inundación.
- iv) No presenta un análisis integrado de los distintos factores implicados en el aumento de los daños por inundaciones.

Un diagnóstico integrado de las causas del aumento de los daños por inundaciones debería incorporar los siguientes factores, que implican competencias tanto de la administración central como de las comunidades autónomas y ayuntamientos:

1. La ocupación de zonas inundables. La principal causa del incremento de los daños por inundaciones, frente a precipitaciones equivalentes o menores, es la creciente ocupación de zonas inundables por viviendas, infraestructuras y todo tipo de equipamientos, lo que incrementa en la misma medida la exposición de la población y de los bienes y por tanto el riesgo de inundaciones. Pese a la abundante normativa existente que obliga a respetar las zonas inundables, lo cierto es que dicha normativa no se cumple. Hay que recordar que las competencias en urbanismo y ordenación del territorio las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por tanto, son estas administraciones las responsables de la principal causa que está impulsando el incremento de los daños por inundaciones, en primer lugar por aumentar la exposición de personas y bienes en zonas inundables y además por otras dos consecuencias del desarrollo urbanístico desbocado, que se indican a continuación.
2. Espacios agrarios cada vez más intensivos y sin prácticas de conservación. La agricultura industrial y la continuada expansión de los regadíos intensivos están cambiando la dinámica hidrológica de amplias extensiones del territorio e incrementando la cantidad de la escorrentía, así como la velocidad de los flujos de agua en caso de precipitaciones intensas, de forma que los efectos de las lluvias torrenciales aguas abajo son más intensos y dañinos, dado que llega más agua y en menos tiempo, lo que da lugar a acumulaciones y picos de avenida mayores que en el pasado. La creciente intensificación de los espacios agrarios, sobre todo de los regadíos, incrementa la escorrentía y sus efectos dañinos a través de los siguientes procesos:
  - En primer lugar, se está reduciendo la cubierta vegetal del suelo en las zonas en las que se han creado nuevos regadíos a través de la roturación de áreas que hasta entonces estaban cubiertas por vegetación natural. Hay que tener en cuenta que la vegetación natural, incluida la vegetación arbustiva y de matorral que es la que de forma natural se encuentra en zonas áridas, es muy eficaz a la hora de retener el suelo, impidiendo el arrastre de sedimentos, así como a la hora de reducir la escorrentía y sobre todo de retenerla, favoreciendo una mayor infiltración, enlenteciendo la escorrentía y reduciendo por tanto los picos de avenida y sus efectos dañinos aguas abajo. La roturación de áreas cubiertas por vegetación natural, incluidos los matorrales de bajo porte, eliminan esta función protectora, incrementando la cantidad y velocidad de los flujos hídricos de las zonas y subcuencas afectadas.
  - En segundo lugar, la intensificación dentro de los propios espacios agrarios también ha eliminado la vegetación natural que existía dentro de los paisajes agrarios tradicionales, lo que está aumentando la escorrentía por las razones ya explicadas. Los secanos mediterráneos y las huertas históricas, estaban constituidos por parcelas de cultivo de mediano tamaño, donde la vegetación natural (parches de matorral, vegetación herbácea silvestre) aparecía en los linderos entre tales parcelas, así como a lo largo de los caminos y otros espacios no cultivados. La vegetación natural, aparecía incluso dentro de las propias parcelas, cuando no estaba presente el cultivo (plantas anuales). Sin embargo la agricultura industrial y los regadíos intensivos eliminan todos



estos elementos protectores, al basarse en cultivos de enorme extensión sin solución de continuidad, donde prácticamente han desaparecido los setos, la vegetación de linderos y las manchas de vegetación natural y donde los cultivos - cuya capacidad de retención de agua y sedimentos es bastante inferior a la de la vegetación natural) ocupan todo el ciclo anual, o bien las áreas no cultivadas permanecen desnudas.

- En tercer lugar la agricultura intensiva ya no aplica las prácticas de conservación del suelo y del agua que se solía aplicar en los cultivos mediterráneos tradicionales. Por ejemplo, se han perdido prácticamente todos los riegos de boquera. Se trata de cultivos de secano que en caso de lluvias torrenciales aprovechaban las escorrentías, desviándolas hacia el cultivo, donde quedaban retenidas, así como sus arrastres, aportando beneficios al cultivo, reduciendo y laminando dichas escorrentías y por tanto mitigando sus efectos aguas abajo. Además, en muchos casos se rotura a favor de pendiente, lo que incrementa la velocidad de los flujos hídricos, reduce la capacidad de infiltración en el cultivo e incrementa el arrastre de sedimentos.
3. La imparable impermeabilización del suelo. Estamos asistiendo a una creciente impermeabilización del suelo, causado por el desarrollo urbanístico y por la proliferación de distintas edificaciones y equipamientos, desde centros comerciales a todo tipo de infraestructuras. Con una mayor superficie impermeable, aumenta la escorrentía frente a una misma precipitación y por tanto los daños por inundaciones, sobre todo en espacios urbanos.
  4. Nuevas infraestructuras que desorganizan el drenaje natural. El desarrollo urbanístico acelerado no sólo está suponiendo la ocupación de zonas inundables y la creciente impermeabilización del suelo, sino la construcción de nuevas infraestructuras (autovías, carreteras, rotondas, taludes), que cortan, desorganizan la red de drenaje y crean barreras a la misma, agravando los daños bajo precipitaciones intensas y reconduciendo los flujos de agua hacia zonas que hasta entonces se habían visto libres de problemas de inundaciones, creando grandes acumulaciones de agua. Estos problemas suelen quedar ignorados o su importancia minimizada, en los estudios y en la tramitación y aprobación de las nuevas edificaciones, urbanizaciones e infraestructuras.
  5. Obras de defensa frente a inundaciones que agravan los daños cuando ésta se produce. Otro de los factores que están contribuyendo de forma significativa a aumentar los daños por inundaciones es, paradójicamente, la construcción de obras hidráulicas de defensa frente a las inundaciones (motas, diques, presas de laminación, dragados, cortes de meandros y encauzamientos). Estas obras hidráulicas han distorsionado la percepción del riesgo y dan lugar a una falsa seguridad que ha favorecido una mayor ocupación de las zonas inundables, aumentando la exposición al riesgo y la vulnerabilidad de la población y sus bienes. Además, motas y encauzamientos tienen complejas y negativas consecuencias para el riesgo por inundaciones, al favorecer una mayor energía y velocidad de las aguas de avenida, aumentando su poder erosivo y capacidad de



destrucción aguas abajo. Por otra parte, estas actuaciones duras frente a las inundaciones causan graves impactos ambientales, al romper el equilibrio morfodinámico del río, eliminar sedimentos, degradar la vegetación natural y destruir hábitats naturales.

6. Los ríos se han quedado sin su espacio. Los cultivos y el crecimiento urbano y de infraestructuras han estrechado, hasta límites inverosímiles en muchos lugares, el espacio asignado al río, olvidando que el río no tiene un sólo caudal o un sólo cauce (el medio) sino distintos cauces para distintos caudales, incluyendo los picos de crecida fluvial y que todos ellos son parte del río.

### ***Sobre el análisis de alternativas***

Las medidas de la alternativa 1, que son las contenidas en el plan hidrológico vigente, incluyen actuaciones de mejora del conocimiento y medidas de gestión como la promoción de los seguros, pero la inmensa mayoría de inversiones y medidas contempladas se refieren a obras hidráulicas, como infraestructuras para la interceptación y canalización de escorrentías, nuevas presas de laminación, recrecimientos de presas existentes, nuevos encauzamientos e infraestructura de defensa en costas. En suma, se mantiene una visión hidráulica obsoleta, alejada de la Directiva europea de Gestión del Riesgo de Inundaciones, que se ha demostrado poco eficaz para reducir los daños por inundaciones y que, además, ocasiona grandes impactos ambientales y el deterioro adicional de las masas de agua, impidiendo alcanzar y mantener el buen estado ecológico y, en definitiva, incumpliendo la Directiva Marco del Agua.

En realidad, en muchas ocasiones estas obras hidráulicas de defensa frente a avenidas no sólo han mostrado una escasa utilidad sino que han contribuido a aumentar los daños por inundaciones por las razones arriba explicadas. Esto quedó claramente demostrado con el encauzamiento del río Segura y los gravísimos daños por inundaciones ocasionados en la Vega Baja a raíz de las lluvias torrenciales de septiembre de 2019.

### ***Propuestas de medidas para una reducción eficaz del riesgo de inundaciones***

Frente a las soluciones de infraestructura gris, que han demostrado no ser eficaces en muchas situaciones para mitigar los riesgos de inundaciones, los cuales aumentarán en las perspectivas de cambio climático, se deberían aplicar medidas en torno a los siguientes seis ejes de acción, los cuales requieren de la coordinación de la Confederación Hidrográfica del Segura y de las comunidades autónomas y ayuntamientos:

#### ***1. Respetar las zonas inundables***

El eje de intervención más importante para reducir de forma significativa - que no eliminar por completo - los daños por inundaciones, es respetar las zonas inundables. La realidad es que las zonas inundables se han venido ocupando de forma creciente durante las últimas décadas con viviendas, infraestructuras y

equipamientos de todo tipo, aumentando la exposición de la población y los daños tanto económicos como en vidas humanas. Hay que recordar que las competencias en ordenación del territorio y en urbanismo son autonómicas y municipales, no estatales. Por tanto, son las comunidades autónomas y ayuntamientos los que están incumpliendo su obligación legal de garantizar que se respetan las zonas inundables y de eliminar las viviendas, equipamientos e infraestructuras situados en las zonas de mayor riesgo o con población más vulnerable. Nada se está haciendo en este sentido.

Por otra parte, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) de la Demarcación del Segura debería incluir, de forma explícita, la obligación de que en un plazo fijado y breve (por ejemplo un año) todos los planes generales municipales de ordenación urbana se adapten a los contenidos y normativa de dicho Plan, muy especialmente a la Cartografía de Zonas inundables. Actualmente el PGRI de la Demarcación del Segura no incluye medidas proactivas para garantizar que el planeamiento urbanístico se adapte a sus contenidos y respete las zonas inundables. En lugar de ello se relega la iniciativa a los ayuntamientos implicados, sin más. La realidad ha demostrado que esto es manifiestamente insuficiente. De esta situación son también responsables las comunidades autónomas, que son las competentes en ordenación territorial y también tienen la obligación de garantizar que los planes municipales cumplen con todas las normativas legales y aplican todas las medidas necesarias para no invadir las zonas inundables. En este sentido hay que destacar que mientras algunas comunidades autónomas cuentan desde hace años con un plan autonómico frente a inundaciones (caso de la Comunidad Valenciana, con el Plan PATRICOVA), otras, como es el caso de la Región de Murcia, siguen sin elaborar este fundamental instrumento, lo que supone una grave irresponsabilidad.

Por otra parte, debe revisarse la Cartografía de Zonas Inundables del PGRI de la Demarcación del Segura, dado que durante la DANA de septiembre de 2019 se inundaron muchas zonas que no aparecen incluidas en dicha Cartografía como Areas con elevado Riesgo de Inundación.

## ***2. Devolver espacio al río: gestionar el territorio fluvial y zonas de desbordamiento aguas arriba de las zonas urbanas***

Se trata de desencauzar y eliminar motas aguas arriba de zonas urbanas y devolverle a ríos, ramblas y cauces parte de sus espacios de desbordamiento, permitiendo una inundación blanda, sin daños a personas y con bajo daño a bienes. Esta inundación blanda en zonas adecuadas, ocupadas por vegetación natural, humedales o determinados usos agrarios, previenen o reducen el impacto de la avenida aguas abajo, protegiendo la zona urbana. Por ejemplo en Murcia los antiguos sotos del río permitirían cumplir esta función.

Este eje de actuación incluye otras medidas englobadas dentro de las denominadas Medidas Naturales de Retención de Agua ([www.nwrm.eu](http://www.nwrm.eu)), que entre otros aspectos contemplan la recuperación del bosque de ribera y la vegetación natural en el conjunto de la red hidrológica, justo lo opuesto a las prácticas más habituales. Por ejemplo, el bosque de ribera es la solución más eficaz para impedir la proliferación de cañas, creadoras de las acumulaciones conocidas como "baldomeras". De hecho,

es casi la única medida eficaz, porque las cañas son muy difíciles de eliminar por cualquier otro método. La eliminación de cañas a base de maquinaria y otros métodos, consume grandes cantidades de presupuesto todos los años en la cuenca del Segura, con escaso éxito. Los árboles de ribera no suponen un peligro, ya que no son arrancados por la crecida, al revés que las cañas. Además, permiten laminar la crecida, a la vez que impiden el crecimiento de las cañas, que sí son un problema. En línea con la Directiva de Inundaciones, las medidas que se han de promover pasan por devolver su espacio a los ríos a través de una gestión adecuada de los territorios fluviales. Frente a la ineficacia de las medidas clásicas de la vieja hidráulica, la Directiva aboga por la renaturalización de los ecosistemas fluviales a través de la recuperación de las llanuras naturales de inundación como vía de laminación de las avenidas. Este territorio fluvial, constituido por el propio río y los espacios inundables adyacentes, actuaría como zona de expansión de las crecidas y en él se deben potenciar las funciones naturales de la llanura de inundación. Además, un territorio fluvial respetado y bien gestionado permite conservar o recuperar la dinámica hidrogeomorfológica, obtener un corredor ribereño continuo que garantizaría la diversidad ecológica, cumplir con el buen estado ecológico, favorecer el filtrado de contaminantes mediante la restauración de sotos como “filtros verdes” y mejorar y consolidar el paisaje fluvial.

Establecer y gestionar adecuadamente el territorio fluvial para paliar los daños de las inundaciones requiere: i) Recuperar meandros y bosques de ribera, que contribuyen a disipar la energía de las crecidas; ii) Retranquear o eliminar diques y motas, dotándolas –en su caso- de compuertas para expandir la inundación suavemente y permitir luego la evacuación de la inundación cuando baje el nivel del río, reduciendo la capacidad destructiva de la avenida aguas abajo; iii) Adaptar los usos a la inundabilidad. En las zonas previstas para este tipo de inundaciones blandas y que estén fuera del Dominio Público Hidráulico, puede haber usos agrario compatibles como determinados cultivos, con cierto riesgo de inundación, riesgo que puede ser gestionado con seguros y compensaciones en caso de daños.

### **3. Implantar Medidas Naturales de Retención de Agua en los espacios agrarios**

Las Medidas Naturales de Retención Agua (NWRM, [www.nwrm.eu](http://www.nwrm.eu)) son un conjunto de actuaciones promovidas por la Comisión Europea inspiradas en la naturaleza y en las prácticas tradicionales de conservación del agua y del suelo. Estas prácticas incluyen, entre otras posibles acciones, las siguientes:

- La recuperación de la vegetación natural en los espacios agrarios, a distintas escalas. Se trata de volver a recuperar los setos vegetales, la vegetación natural en los linderos de las parcelas y pequeñas manchas de vegetación natural en el conjunto del paisaje o subcuenca agraria. De esta forma aumenta la capacidad de infiltración y sobre todo se reducen y enlentecen las escorrentías, reduciendo los picos de avenida aguas abajo. Por ejemplo los setos vegetales no impiden el paso del agua, pero sí lo retienen parcialmente, favoreciendo la infiltración y reduciendo la intensidad y la velocidad de los flujos hídricos.
- La recuperación de la red de drenaje natural. La agricultura intensiva suele eliminar o alterar gravemente el estado de la red de drenaje natural, especialmente en zonas muy llanas como el Campo de Cartagena. Todas estas alteraciones

impiden que dicha red de drenaje funcione adecuadamente durante los episodios de lluvia, de forma que los flujos de agua, desorganizados, afectan a espacios que hasta entonces no habían tenido problemas, incrementando los daños tanto en los propios cultivos como en los espacios urbanos. Se ha de recuperar la red de drenaje natural y revegetar sus márgenes, contribuyendo a los beneficios ya mencionados.

- El mantenimiento de una cubierta verde en los cultivos. Tanto en el caso de cultivos arbóreos como en las parcelas no cultivadas, se trata de mantener una cubierta verde con especies herbáceas adecuadas, que contribuyan a retener sedimentos y favorezcan la infiltración en caso de precipitaciones.

Además, las medidas naturales de retención de agua tienen otros beneficios adicionales. Uno de los más importantes es que contribuyen a reducir de forma significativa la contaminación agraria difusa, provocada por la aplicación de fertilizantes agrarios, causantes de la exportación de enormes cantidades de nutrientes y de los procesos de eutrofización asociados, como se ha evidenciado en el caso de la laguna del Mar Menor, debido fundamentalmente a los regadíos intensivos del Campo de Cartagena. Otros beneficios de las medidas naturales de retención de agua en los espacios agrarios son la mejora del paisaje y su contribución a la mejora de la biodiversidad, proporcionando el hábitat de distintas especies silvestres que, en muchos casos, son también aliadas de la agricultura.

#### **4. Implantar sistemas de Drenaje Urbano Sostenible**

Los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) abarcan un amplio abanico de medidas que forman también parte de las Medidas Naturales de Retención de Agua, en este caso aplicadas a entornos urbanos. Se trata de actuaciones destinadas a reducir y laminar los caudales de entrada en la red de saneamiento para optimizar su funcionamiento y minimizar así los daños por inundación en zonas urbanas. Estas medidas, centradas en reducir la impermeabilización del suelo urbano incrementando las superficies vegetadas, incluyen, entre otras, zanjas filtrantes, pavimentos permeables, humedales artificiales, jardines de lluvia y otro tipo de espacios multifuncionales diseñados como espacios inundables. A nivel internacional existe una consolidada y exitosa experiencia en la implementación de sistemas de drenaje urbano como herramienta de planeamiento urbano no sólo para reducir los daños por inundación sino también para mejorar el medio ambiente urbano, con beneficios adicionales tales como la reducción del efecto “isla de calor” o el aumento de la biodiversidad.

#### **5. Eliminar viviendas e infraestructuras en zonas de alto riesgo**

Es urgente realizar un censo de viviendas y equipamientos en zonas de riesgo elevado, bien por un alto peligro de inundaciones (por ejemplo por situarse en zonas inundables dentro del periodo de retorno de 10 años) o por tratarse de casos con elevada vulnerabilidad social (colegios, centros sanitarios, residencias de mayores, viviendas de grupos poblacionales desfavorecidos, etc). Estas situaciones deben ser estudiadas de forma individualizada y en muchos casos la medida a aplicar será el traslado, contando con las medidas y ayudas públicas que sean necesarias.

## **6. Impulsar una estrategia de comunicación social sobre la necesidad de una gestión adaptativa frente a las inundaciones**

Una estrategia integral frente a las inundaciones ha de incluir educar en la incertidumbre y en la cultura del riesgo. Es fundamental contar con los habitantes ribereños, desarrollando programas de educación, comunicación social y de capacitación que permitan modificar la percepción pública en torno a los ríos y el papel de las crecidas, en la certeza de que solo una sociedad bien informada apoyará una gestión adecuada de los territorios fluviales.

## **6. Sobre el regadío**

El regadío recibe una extensa atención en el EPTI, protagonizando 4 de los 16 Temas Importantes recogidos en el mismo: TI-3, TI-7, TI-8, y TI-15. Sin embargo, a pesar de tan extensa dedicación al regadío de la demarcación del Segura, sorprende que la conservación de los regadíos históricos como agropaisajes de enorme valor ambiental, productivo y cultural no merezca la más mínima atención. Consideramos que los regadíos históricos deben constituir un Tema Importante esencial en la Demarcación del Segura.

### ***i) Sobre el control de la superficie de regadío***

El tema importante 7 se refiere al control de las superficies de regadío. El EPTI señala la existencia de unas 308.800 ha de regadío en la demarcación del Segura, según los datos que figuran en la página 137 de la Memoria. En la página siguiente se indican dos cifras diferentes: superficie bruta, 471.640 ha; superficie neta, 262.393 ha, la misma cifra que figura en el plan de 1998. Más allá de este baile de cifras, no es creíble que la superficie de regadío actual en la demarcación del Segura sea la misma que ya existía hace 22 años, pese a la constatada aparición desde 1998 de nuevas superficies de riego en toda la cuenca. Por ejemplo el EPTI señala que en el Campo de Cartagena hay 43.000 ha de regadío, cuando trabajos de teledetección señalan que en 2009 la superficie de regadío neto en el Campo de Cartagena se situaba en el entorno de las 60.000 ha, un 39% más. Desde entonces el regadío en el Campo de Cartagena, como en el resto de la cuenca, ha seguido aumentando.

Los tres planes hidrológicos elaborados hasta la fecha (aprobados en 1998, 2014 y 2016) incluyen en sus correspondientes normativas distintas vías que permiten legalizar regadíos creados cuando ya existían normas que lo impedían y que por tanto tenían la condición de ilegales. En los últimos años se están regularizando concesiones a fincas a las que durante décadas se permitió hacer uso de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados. Parte de estos regadíos ilegales se están legalizando con cargo a aguas desaladas. En definitiva, la Confederación Hidrográfica del Segura primero prohíbe ampliar regadíos y a continuación lo consiente para, en el siguiente ejercicio de planificación hidrológica, prever los mecanismos necesarios para regularizar tales superficies creadas y no inscritas. Y así sucesivamente desde 1998. De hecho, justo tras la aprobación del Plan



Hidrológico 2009-2015, aprobado en 2016, se licitó un servicio técnico para ayudar a regularizar los numerosos aprovechamientos pendientes que no podían acogerse a la inscripción según las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas, por no estar acreditada su existencia a fecha de 1 de enero de 1986. Este regadío ilegal, creado después de 1986 y no amparado por autorización alguna, ha sido denominado en la cuenca del Segura como "regadío consolidado", denominación que no tiene significado jurídico pero que viene siendo utilizada como forma de facilitar que dicho regadío sea oficialmente asumido y regularizado.

Por otra parte, el T.I. 7 "Control de extracciones y superficies de riego", no permite reducir las incertidumbres y baja fiabilidad de la contabilidad de las superficies de riego y su estatus legal, así como de las extracciones de agua y su estatus legal, dado que no se hace la menor referencia a la ampliación ilegal de regadíos que ha tenido y sigue teniendo lugar en la cuenca, ni a los resultados reales de los expedientes iniciados en esta materia. Además, si bien hay que señalar como avance positivo la instalación de contadores volumétricos en las grandes extracciones (más de 500.000 m<sup>3</sup>) anuales, este control sólo alcanza a las extracciones con derechos y nada informa acerca de las extracciones que utilizan pozos ilegales, los cuales deben representar decenas de miles en el conjunto de la cuenca.

En definitiva, el EPTI no aporta un diagnóstico serio en este sentido, no lleva a cabo una evaluación crítica acerca del fracaso de la labor del organismo de cuenca a la hora de evitar los usos no autorizados de agua que se vienen produciendo y por tanto no permite generar confianza acerca de los datos de balance y diagnóstico que figuran en el mismo en relación con las superficies de regadío, sus demandas (brutas y netas), así como en relación con el consumo real de recursos hídricos de cada origen.

## ***ii) Acerca de los regadíos abastecidos por el trasvase Tajo-Segura***

El TI-3 analiza la situación de los regadíos del trasvase Tajo-Segura. Las superficies de riego creadas al amparo de la normativa que regula el destino de las aguas del trasvase Tajo-Segura no pueden ser consideradas como parte del mismo sistema de explotación de los regadíos preexistentes o creados con recursos ajenos al trasvase Tajo-Segura por varias razones:

- En primer lugar, se trata de recursos ajenos a la demarcación hidrográfica del Segura, por lo que las demandas atendidas con tales recursos no pueden considerarse ligadas al balance recursos-demandas de la Demarcación.
- En segundo lugar, la normativa no garantiza derechos sobre volúmenes concretos del trasvase Tajo-Segura, dado que legalmente tienen el carácter de "excedentarios", de forma que las demandas de la cuenca del Tajo tienen prioridad y sólo si se considera que sobra agua (por otra parte un concepto sin sentido hidrológico ni ambiental), ciertos volúmenes pueden ser derivados a la Demarcación del Segura. Por tanto desde el principio (Ley de 1971 que regula el trasvase Tajo-Segura) quedó claro que en algunos periodos y circunstancias (una sequía por ejemplo) estos recursos derivados o derivables no permitirán satisfacer las demandas. El carácter excedentario y en modo alguno garantizado de las aguas constituye una condición esencial del trasvase Tajo-



Segura y de las demandas satisfechas con sus recursos, formando parte de la normalidad legalmente establecida para el trasvase y los regadíos atendidos por el mismo.

Por tanto, de ninguna manera esta normal circunstancia debe afectar al balance de recursos propios y demandas propias de la demarcación, por lo que los perímetros atendidos por el trasvase Tajo-Segura deben constituir un sistema de explotación diferente y diferenciado de los perímetros de regadío atendidos con aguas propias de la cuenca. Esto redundará en una plena transparencia acerca del origen y destino de las aguas del trasvase y acerca del origen y destino de las aguas de la cuenca.

Esta imprescindible transparencia no existe actualmente debido a i) la indeseable confusión de orígenes, destinos y derechos que genera la existencia de un sistema de explotación único; ii) los insuficientes mecanismos de inspección y control; iii) las dificultades de acceso ciudadano a información básica como es el Catálogo de Aguas y el Registro de Aguas y iv) la inexistencia de un acceso web cartográfico a todos los perímetros de riego inventariados y sus datos básicos.

Por ello consideramos que se debe modificar esta consideración de sistema único de explotación en la Demarcación del Segura que recoge el artículo 2 de las disposiciones normativas del PHDS 2015/21 y que se señala en la página 252 de la Memoria del EPTI.

En cuanto a la insuficiente atención a las demandas de los regadíos del trasvase Tajo-Segura, lo que constituye el problema central identificado por este Tema Importante TI-3, el EPTI incurre en una afirmación errónea cuando señala que: "...el trasvase medio para regadío recibido, con el régimen de caudales mínimos actualmente establecido en el río Tajo, ha sido de tan solo 205 hm<sup>3</sup>/año, frente al máximo de 400 hm<sup>3</sup>/año previsto. Esto ha propiciado unas zonas regables en situación de infradotación y a unos regadíos que por ser desarrollados con la previsión de disponer de un volumen superior, incumplen los criterios de garantía previstos en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH)" (página 172 de la Memoria del EPTI. La negrita es nuestra). No es cierto que existiera la "previsión de disponer de un volumen superior", como se explica a continuación.

- En primer lugar, la ley sobre el aprovechamiento conjunto del Tajo y del Segura, establece un trasvase máximo de 600 hm<sup>3</sup> anuales (400 hm<sup>3</sup> para regadío) en una primera fase y de un máximo de 1000 hm<sup>3</sup> anuales en una segunda fase, que nunca se llegó a implementar. La Ley deja claro que el volumen a trasvasar tiene el carácter de recursos excedentarios con respecto a las necesidades de la cuenca del Tajo existentes en cada momento y que ese volumen de 600 hm<sup>3</sup> anuales constituye un techo máximo y por tanto en absoluto está garantizado. Constituyó un error mayúsculo que la administración pública asumiera la disponibilidad de ese volumen cada año y por tanto promoviera, de entrada, una superficie atendida con tales volúmenes muy superior a lo que razonablemente cabía esperar dado que, insistimos, la ley no garantizaba la disponibilidad de ningún volumen mínimo trasvasable.
- En segundo lugar, no sólo se planificó por parte de la administración pública una superficie total atendida por el trasvase Tajo-Segura asumiendo la

disponibilidad constante cada año de los volúmenes máximos posibles (lo que supuso una enorme irresponsabilidad y un tremendo error de planificación), sino que además se permitió primero y asumió después el incremento de los perímetros de regadío que habían de ser atendidos por el trasvase Tajo-Segura. En efecto, las expectativas creadas por el trasvase alentaron el crecimiento de nuevas superficies de regadío por encima de las teóricamente atendibles aún en el supuesto irrealista de que el volumen máximo trasvasable estuviera garantizado. Estas nuevas superficies se crearon con aguas de cualquier origen, a la espera de obtener definitivamente derecho a riego con aguas del trasvase. La Confederación Hidrográfica del Segura debía haber sancionado esta ampliación de regadíos no prevista por la planificación pero en realidad hizo justo lo contrario: incorporar todos estos nuevos regadíos a los balances oficiales recursos-demandas y a la planificación hidrológica general (lo que constituye, como ya se ha dicho, la práctica habitual en la cuenca del Segura).

### ***iii) Acerca de la importancia socioeconómica del regadío en la Demarcación***

El TI-8 se refiere a la importancia socioeconómica del regadío. En primer lugar sorprende el título del Tema Importante 8: "Importancia socioeconómica del regadío en la Demarcación". No se entiende porqué el valor socioeconómico de un sector económico específico - el agrario - constituye un tema importante para la planificación hidrológica. Menos aún se entiende porqué la importancia socioeconómica del regadío se considera un tema importante para la planificación hidrológica, pero no la de otros sectores económicos y sociales. Entre estos otros sectores cabe destacar el industrial (afectado por la dificultad de obtener concesiones de agua debido al denominado déficit estructural de la cuenca generado, recordemos, debido a un regadío que consumo en torno al 85% de todos los recursos hídricos disponibles); el abastecimiento humano, absolutamente ligado al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, reconocido por Naciones Unidas como derecho humano universal desde 2010 o sectores socioeconómicos afectados por una mala gestión del agua y de las masas de agua, como es el sector turístico y el sector de la pesca, en la laguna del Mar Menor y su entorno.

### ***iv) Acerca de la asignación para nuevos regadíos de interés social en las cabeceras de los ríos Segura y Mundo***

El Tema Importante 15 del EPTI del Segura está dedicado a la asignación de nuevos regadíos de interés social en las cabeceras de los ríos Segura y Mundo. El EPTI justifica la reserva de recursos para esta asignación por la necesidad de incrementar el regadío para frenar el despoblamiento y revitalizar la economía en este ámbito territorial. En concreto afirma que "Se considera que la ejecución de las medidas previstas en el PHDS 2015/21 contribuirá a fijar la población en la Sierra del Segura y en el Sureste de Albacete y reducir el descenso de la misma" (página 396 de la Memoria del EPTI).

Sin embargo, no se aporta un estudio socioeconómico que contenga: 1º) un diagnóstico riguroso acerca de las causas del despoblamiento y el estancamiento y deterioro socioeconómico de las cabeceras de los ríos Mundo y Segura; 2º) Un

análisis de las distintas alternativas socioeconómicas (incluyendo o no la ampliación de regadíos) para la revitalización socioeconómica del territorio, incluyendo un estudio participativo que permita recoger las demandas y preferencias de la población local y 3º) un análisis coste-eficacia que cuantifique el impacto esperable en términos de fijación de territorio de las distintas medidas y alternativas, incluyendo tanto la ampliación de regadíos como otras opciones, como el turismo de la naturaleza, la mejora de los servicios públicos y otras demandas de las poblaciones locales.

En ausencia de estos tres estudios y análisis, la afirmación de que la ampliación de regadíos en la cabecera de la cuenca será útil para fijar la población en el territorio constituye una hipótesis sin fundamento. Esta hipótesis es asumida sin ser cuestionada en ningún momento, hasta el punto de que el EPTI ni siquiera plantea el mínimo análisis de alternativas que sí se incluye en el resto de Temas Importantes. En realidad existen numerosos indicios de que la ampliación de regadíos no constituye una medida eficaz para fijar población en el territorio:

- La ampliación de regadíos en entornos próximos, en general de carácter intensivo, agro-industrial, se basan en trabajo asalariado y condiciones sociales y laborales de baja calidad, lo que no redundará en la mejora socioeconómica del conjunto de la población en el territorio.
- Estos nuevos cultivos, de carácter intensivo, no son garantía alguna de asentamiento de la población en el territorio ni de mejora de la socioeconomía de la zona. De hecho, en otras zonas de España donde actualmente se ha planteado la ampliación de regadíos para favorecer la economía de zonas rurales, distintos estudios han demostrado que el regadío previsto hubiera incurrido en una rentabilidad económica fuertemente negativa y que las poblaciones locales tienen otras prioridades a la hora de considerar quedarse en el territorio, como son la mejora de los servicios públicos.

Por otra parte, la ampliación de regadíos en las cabeceras de los ríos Segura y Mundo ocasionará impactos ambientales y sociales. En primer lugar los acuíferos que todavía no están sobreexplotados son justamente los que tienen un mayor valor ambiental asociado, por mantener fuentes, manantiales y humedales. Además son precisamente los más sensibles frente a la explotación hídrica, porque es justamente la sobreexplotación inicial, la cual podría generarse por la mayor explotación prevista para crear estos nuevos regadíos, la que concentra prácticamente todos los impactos ambientales negativos de un proceso de sobreexplotación de acuíferos. En segundo lugar, la asignación de reservas para nuevos regadíos en este territorio agravará las situaciones de sobreexplotación local de aguas subterráneas ya existentes. En tercer lugar, las nuevas captaciones de recursos superficiales sin duda tendrá impactos negativos en los ríos y tributarios afectados y podría también afectar negativamente a los usos existentes aguas abajo. Hay que tener en cuenta que tales recursos están ya de forma directa o indirecta utilizados por otros usuarios situados aguas abajo o forman parte de los flujos necesarios para mantener un adecuado régimen de caudales ecológicos. Además, el EPTI prevé la creación de 5.000 nuevas hectáreas brutas de regadío intensivo, lo que supone una absoluta transformación del territorio y un tremendo impacto sobre su valioso patrimonio ecológico, cultural y paisajístico, que mermará considerablemente las posibilidades

de alternativas de desarrollo como el turismo rural y el turismo de la naturaleza, uno de los principales activos del territorio y el más importante potencial socioeconómico del mismo. Finalmente, a diferencia de los regadíos históricos, donde los excedentes de riego vuelven al río, los nuevos regadíos intensivos que se pretenden implantar, que tendrán riego por goteo de acuerdo con el EPTI, aumentarán de forma considerable no sólo el uso del agua (agua captada) sino sobre todo el consumo de agua (agua consumida neta en la evapotranspiración del cultivo), sin flujos de retorno al río, de forma que la detracción adicional a los recursos hídricos de la cabecera será significativa y mucho mayor, en términos proporcionales, que si se trataran de huertas tradicionales ligadas al río.

***v) Acerca de los impactos ocasionados por la expansión del regadío intensivo en la Demarcación del Segura***

La expansión del regadío en la Demarcación del Segura ha ocasionado y sigue ocasionando múltiples impactos ambientales, entre los que cabe destacar: la sobreexplotación de los únicos acuíferos de la cuenca hasta ahora no sobreexplotados; la reducción de los caudales circulantes en el río Segura y resto de cauces y el empeoramiento de la calidad del agua; la contaminación severa de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos y pesticidas; la ocupación de hábitats naturales de alto valor ecológico; la ocupación de secanos extensivos de interés ambiental de los que dependen aves esteparias de gran interés naturalístico; la salinización de los suelos y del río Segura por los drenajes agrarios procedentes de nuevos regadíos creados en zonas margosas ricas en sales, como ocurre con parte de los nuevos regadíos del trasvase Tajo-Segura; la dulcificación de sistemas salinos, lo que supone la banalización de los mismos y la pérdida de sus valores más singulares y la roturación y puesta en cultivo de zonas marginales, que han desencadenado activos procesos de erosión y de desestabilización de la dinámica de las laderas.

En definitiva, el regadío se ha expandido muy por encima de lo sostenible en la Demarcación de Segura no sólo por suponer una demanda hídrica mucho mayor que los recursos de la cuenca disponibles sino, además, por la magnitud de los costes ambientales asociados a dicha expansión.

***vi) Acerca de la conservación y gestión sostenible de las huertas históricas asociadas a ríos y manantiales***

Pese a que el EPTI del Segura dedica 4 de los 16 Temas Importantes al regadío, resulta muy sorprendente que ninguno de ellos esté dedicado a las huertas históricas asociadas a los ríos y manantiales, las cuales constituyen un valioso agropaisaje con un importante patrimonio ambiental y cultural, que desde hace décadas vienen afrontando crecientes amenazas de desaparición. Consideramos por ello que el EPTI debería haber dedicado un Tema Importante específico a la conservación y recuperación de las huertas históricas de la demarcación del Segura. Las huertas históricas aportan múltiples servicios y funciones ambientales, sociales, económicas y culturales. Por ejemplo las huertas históricas constituyen sistemas muy productivos, gracias a la disponibilidad de suelo muy fértil y agua renovable, cuya sostenibilidad se ha demostrado sobradamente por el propio mantenimiento de

tales sistemas a lo largo de varios siglos. También mantienen una elevada diversidad biológica de especies silvestres y centenares de variedades tradicionales. Además permiten la conservación de un recurso natural no renovable de gran valor y enormemente escaso: el suelo de mayor fertilidad natural. Por otra parte presentan un elevado valor paisajístico, que puede favorecer actividades socioeconómicas como el turismo rural y de la naturaleza. Las huertas históricas situadas en el entorno de espacios urbanos contribuyen a mantener un microclima más fresco en el entorno, mitigando el impacto del efecto “isla térmica de la ciudad” y suavizando la intensidad de las olas de calor, de importancia creciente debido al cambio climático. Finalmente las huertas históricas albergan un rico patrimonio histórico y cultural, tanto material (edificios históricos, molinos, acequias, azarbes y azudes, etc) como inmaterial (aspectos etnográficos, vocabulario, tradicionales...), de enorme valor por la gran longevidad de estos agropaisajes.

Todo este patrimonio ambiental y cultural está seriamente amenazado de desaparición por la expansión urbana, la baja rentabilidad en las condiciones actuales y por los planes de modernización de regadíos tradicionales. En relación con los planes de modernización de regadíos tradicionales, tales planes confunden la eficiencia a escala de parcela con la eficiencia del conjunto del regadío. El agua sobrante del riego por inundación en realidad recircula a través del sistema de acequias y azarbes hasta el río y otras zonas de huerta situadas aguas abajo, de modo que la eficiencia a escala global del conjunto del sistema es muy alta. Sin embargo, la instalación del riego por goteo reduce los retornos de riego, por lo que afecta a los caudales circulantes y a los recursos asignados a otros usuarios situados aguas abajo. Además, a la dudosa eficacia de los planes de modernización en el caso de las huertas históricas se añade que tales planes ocasionan importantes daños al patrimonio ambiental y cultural de estos agropaisajes, en los que la red tradicional de acequias y azarbes es fundamental.

### ***En relación con el análisis de alternativas***

En relación con el control de las extracciones y superficies de riego, no hay análisis de alternativas y se opta directamente, por no plantear alternativas adicionales a las ya incluidas en el plan vigente, lo que denominan como Alternativa 1, todo ello pese a las manifiestas carencias y pese a que se reconoce que el cambio climático agravará los problemas. Las medidas contempladas en el plan vigente, las únicas que se pretenden ejecutar en el tercer ciclo de planificación, consisten en: a) medidas ya existentes como una obligación legal en la cuenca del Segura, por lo que difícilmente se pueden considerar como una "medida", como es el caso de la prohibición de concesiones de recursos propios para nuevos regadíos o el sometimiento al régimen de caudales ecológicos de cualquier concesión; b) medidas necesarias pero claramente insuficientes, como seguir con el control volumétrico a través de contadores (compatible con extracciones ilegales no cuantificadas ni suficientemente atajadas); c) medidas que agravarán los problemas, como es el caso de la eufemísticamente llamada "Regularización concesional de regadíos consolidados", utilizando el concepto de regadío consolidado, sin base jurídica y que en la práctica supone en muchos casos la legalización de regadíos ilegales.



La realidad de la cuenca es que no hay ni una sola hectárea de regadío ilegal que haya sido eliminada y el terreno devuelto a su condición preexistente, como marca la Ley y que no se prevén medidas suficientes y claramente eficaces para una mejora sustancial del control de las superficies de regadío y de las extracciones (superficiales y subterráneas). De hecho de acuerdo con el EPTI está previsto que continúe la regularización de superficies de regadío sin derechos, denominados "consolidados", creados a partir de 1998, cuando la normativa ya impedía su amparo legal.

En relación con el análisis de alternativas referidas a los regadíos del trasvase Tajo-Segura, el EPTI parece optar por la Alternativa 2, en la que se pretende alcanzar la plena satisfacción de las demandas de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura en 2027 ampliando la capacidad de las desaladoras existentes e incorporando además nuevos recursos externos, es decir, nuevos trasvases, de los que no se identifica ni origen, ni volumen. Por el contrario, las medidas de gestión de la demanda, frente a una expansión del regadío del TTS por encima de lo planificado, brillan por su ausencia. En definitiva, las alternativas para el caso de los regadíos del TTS asumen un incremento de hecho de las demandas por encima de lo planificado y se centran en nuevas alternativas de oferta, constituidas, según la alternativa, por i) el uso de recursos propios de la cuenca (con importantes impactos ambientales por sobreexplotación de acuíferos y sociales por daños a otros usuarios), ii) el uso de recursos desalados (lo que puede entrar en conflicto con el uso de tales recursos para eliminar la sobreexplotación de acuíferos) y iii) la recurrente alusión a la necesidad de nuevos recursos externos, es decir nuevos trasvases.

Frente a ello, cabe hacer las siguientes consideraciones:

Primera: la gestión del trasvase Tajo-Segura será cada vez más problemática por tres razones: i) Una tendencia decreciente de recursos disponibles que continuará en el futuro debido al cambio climático. De hecho, la reducción de recursos en los últimos años en la cabecera del Tajo ha sido mayor incluso que en la cuenca del Segura; ii) las normativas, tanto estatales como europeas, obligan a recuperar el buen estado de todos los tramos fluviales, incluyendo los situados en la cabecera del Tajo, que necesitan un significativo incremento del régimen de caudales fijados, para alcanzar el buen estado ecológico a que obliga la Directiva Marco del Agua. Esta obligación ha sido además refrendada por cinco sentencias del Tribunal Supremo, que han de ser acatadas; iii) el conflicto social en torno al trasvase Tajo-Segura no se va a reducir sino que seguirá creciendo, dado que cada vez más ciudadanos y entidades de la sociedad civil vienen cuestionando el trasvase Tajo-Segura.

Segunda: estos tres factores se realimentan entre sí y empujan hacia una misma dirección: más allá de circunstancias puntuales, cada vez habrá menos recursos trasvasados, factor que se une a la reducción de los recursos propios de la cuenca debido al cambio climático.

Tercera: Es necesaria por tanto una hoja de ruta para la progresiva desconexión hídrica de las cuencas del Tajo y del Segura. Esta hoja de ruta debería incluir lo siguiente:

- La realización de una auditoría de todos los perímetros de riego existentes, que permita conocer con detalle, para cada uno de tales perímetros, la



localización y superficie del perímetro de regadío, fecha de creación, origen u orígenes de los recursos hídricos utilizados, situación jurídica del perímetro de riego y de los recursos hídricos utilizados, volumen de agua concedida y sistema de control del uso real del agua. Dicha auditoría debería ser actualizada de forma regular y estar disponible a través de internet a cualquier interesado.

- La sanción ejemplar de cuantos usos no autorizados de agua y superficies irregulares de regadío se detecten, obligando a la restitución del terreno a su uso anterior.
- Eliminar del futuro plan hidrológico y su normativa toda referencia a la regularización administrativa de las superficies de riego sin derechos de agua, excluyendo cualquier vía que facilite la legalización de regadíos ilegales o irregulares y por tanto supongan un premio al infractor, como el concepto de “regadíos consolidados”, sin encaje jurídico alguno.
- Descartar nuevos proyectos de modernización de regadíos y llevar a cabo una rigurosa evaluación de todos y cada uno de los planes de modernización de regadíos ejecutados en la Demarcación del Segura y de los resultados obtenidos. Dicha evaluación debe incluir el coste final, porcentaje de subvención pública total, consumo hídrico neto total antes y después de la actuación, objetivos de ahorro del proyecto y ahorro neto final obtenido, destino del agua ahorrada, en caso de que se hayan constatado ahorros y coste-efectividad del volumen de agua ahorrado ( $\text{€/m}^3$  del agua ahorrada). En este sentido hay que recordar que las modernizaciones de regadíos por sí solas no logran reducir el consumo de agua, debido a que la mayor eficiencia en la aplicación incrementa la producción y por tanto incrementa el consumo de agua en la cuenca, a la vez que reduce los retornos a ríos y acuíferos. Al aumento del consumo neto de agua por el aumento de la evapotranspiración, se añade el efecto rebote debido a la intensificación del cultivo y las frecuentes ampliaciones del perímetro regado que tienen lugar en muchos proyectos de modernización.
- Aplicar la recuperación de los costes del agua en los usos agrarios incluyendo los costes ambientales, en aplicación del principio quien contamina o deteriora paga.
- Debe abandonarse la planificación rígida, basada en demandas fijas y asumir una planificación y gestión adaptativa, basada en demandas con un cierto margen de flexibilidad. En años secos ha de aplicarse una reducción de las demandas consuntivas de los usos no prioritarios, como el regadío o usos urbanos no ligados al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

De la misma manera, una reducción de los niveles de garantía de suministro a excepción de los usos prioritarios (abastecimiento humano y caudales ecológicos) no sólo es posible sino deseable. El establecimiento del nivel de garantía no puede responder a consideraciones meramente técnicas y debe responder a la relación entre nivel de garantía, coste económico y afecciones ambientales y socioeconómicas asociadas. El concepto de costes desproporcionados debe aplicarse no sólo en la

- evaluación de los costes y beneficios de las medidas necesarias para mantener el Buen Estado ecológico, sino también en relación con los costes y beneficios asociados a la elección de uno u otro nivel de garantía.
- Se debe elaborar y aplicar una hoja de ruta para la progresiva desconexión hídrica de las cuencas del Tajo y del Segura, dentro del marco de planificación de ambas cuencas y poniendo en marcha procesos de negociación y consenso para acordar un proceso de transición hídrica con objetivos parciales intermedios y temporalizados, contando con una amplia participación pública en ambas cuencas, incorporando criterios ambientales y que prevea mecanismos de equidad social que minimicen los impactos socioeconómicos de dicha transición en los agricultores más vulnerables. Dicha hoja de ruta debería incluir los siguientes aspectos: i) a corto plazo, la sustitución en zonas cercanas a la costa de los recursos hídricos suministrados procedentes del río Taibilla y del trasvase Tajo-Segura por recursos procedentes de la desalación marina; ii) a medio plazo, la reducción progresiva de los recursos aplicados procedentes del trasvase Tajo-Segura hasta su progresiva desaparición, a través de la eliminación de los usos irregulares o no autorizados, la reducción de las demandas agrarias y urbanas y el uso de la desalación marina.
  - En el caso de las huertas históricas, es necesaria una actuación integrada de todas las administraciones públicas, incluyendo tanto la Confederación Hidrográfica del Segura como las administraciones autonómicas competentes en materia agraria y ambiental, para aplicar medidas de protección urbanística, paisajística y territorial, de garantía de acceso a los recursos hídricos necesarios en cantidad y calidad, de recuperación ambiental y del patrimonio cultural y de revitalización de las huertas históricas como espacios productores de alimentos. Deben identificarse y asignar un estatus diferenciado a todos los perímetros de riego conectados espacial y funcionalmente a ríos y manantiales. En el ámbito de las competencias en materia de aguas, es necesario: i) Garantizar el cumplimiento efectivo de la prioridad de las huertas históricas a la hora de que se garanticen los recursos hídricos que necesitan tanto en cantidad como en calidad; ii) Conservar y recuperar el patrimonio cultural y ambiental ligado a los sistemas de riego tradicional constituido por acequias, azarbes y resto de elementos hidráulicos históricos; iii) Deben descartarse los proyectos de modernización de regadíos históricos por resultar inútiles para el ahorro de agua debido a la reducción de los retornos y ser contraproducentes a nivel ambiental, económico y social. Los planes de modernización de regadíos tradicionales, que consisten básicamente en el entubamiento de las acequias tradicionales y en la construcción de embalses de riego para facilitar la instalación de riego por goteo, ignoran la elevada eficiencia de los regadíos tradicionales a escala del conjunto del sistema, eliminan los retornos de riego, que son claves en el mantenimiento de la dinámica natural del sistema huerta-acuífero aluvial-río, incrementan la evapotranspiración y por tanto el consumo neto de agua y destruyen el valor patrimonial del sistema riego tradicional, de enorme

valor cultural y ambiental; iv) proceder al desentubamiento y recuperación ambiental y funcional de las acequias y azarbes entubados. Además ha de recuperarse la vegetación de ribera y la vegetación tradicional característica de la red hidráulica tradicional, así como recuperar la funcionalidad de la red hidráulica tradicional, por su papel en el mantenimiento de las condiciones microclimáticas, en la reducción del efecto isla de calor de la ciudad, en la laminación de avenidas, en la reducción de la contaminación difusa agraria, en la conservación de la biodiversidad y en el valor paisajístico de la huerta.

## **7. Sobre la Red Natura y Reservas naturales fluviales**

El EPTI debería incluir como Tema Importante las masas situadas en espacios protegidos, especialmente Red Natura y Reservas Naturales Fluviales.

En estas masas es necesario fijar objetivos ambientales específicos, garantizar un régimen de caudales ecológicos que garanticen no sólo el buen estado de las masas sino la conservación de las especies, hábitats y comunidades que habitan tales masas y, en caso necesario, llevar a cabo la restauración ecológica de estos tramos fluviales y sus riberas. Se ha de incorporar la información disponible, de carácter tanto directo como indirecto (por ejemplo, estudios científicos) acerca de los requerimientos hídricos necesarios para mantener un estado de conservación favorable de las especies y hábitats de los espacios protegidos. Si dichos requerimientos hídricos no han sido establecidos, las autoridades competentes en materia de agua y de medio ambiente deberían estimar tales requerimientos, sobre la base de la información científica disponible, aplicando el principio de precaución.

Por otra parte, las Reservas Naturales Fluviales de la Demarcación del Segura necesitan que se elabore un plan de gestión específico, en coordinación con las administraciones autonómicas competentes en materia ambiental y garantizar en la normativa del Plan Hidrológico la exclusión de nuevas concesiones que afecten a tales Reservas Naturales Fluviales.

## **8. Sobre el Mar Menor**

El Tema Importante 4 está dedicado a la “Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia”. Se trata sin duda de uno de los principales temas importantes de la Demarcación del Segura.

### ***Sobre el diagnóstico***

El diagnóstico que realiza el EPTI de la situación de la laguna costera del Mar Menor contiene numerosas carencias e inexactitudes. No estamos de acuerdo en la afirmación de que “Cada una de las distintas actividades desarrolladas en la zona es una fuente potencial de entrada de sustancias contaminantes o puede tener efectos medioambientales. No obstante su incidencia sobre la dinámica lagunar y de su cuenca asociada no es todavía bien conocida ...”. En realidad la incidencia de las

actividades de la cuenca sí es conocida. el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor elaboró un informe de diagnóstico de la situación del Mar Menor, que contiene un detallado análisis del estado del conocimiento, incluyendo las causas y consecuencias de la crisis eutrófica del Mar Menor. No se entiende por qué el EPTI no toma este informe científico como referencia para el diagnóstico del Mar Menor. Este informe señala que la principal fuente de los nitratos que alcanzan la laguna son los cultivos agrícolas de la cuenca del Mar Menor o Campo de Cartagena. No sé entiende porqué el EPTI insiste en considerar que la incidencia de las actividades sobre el estado del Mar Menor no es bien conocida.

También sorprende que la superficie de regadío en el Campo de Cartagena sea cuantificada en el EPTI en 43.071 hectáreas (página 197 de la Memoria del EPTI), similar a la superficie reconocida por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, cuando la propia Confederación Hidrográfica del Segura ha estimado por teledetección al menos unas 9.500 hectáreas de regadío en el Campo de Cartagena sin concesión de aguas<sup>1</sup>. La situación generalizada de desgobierno por parte de los regadíos del Campo de Cartagena en materia de aguas, medio ambiente y normativas sectoriales queda ampliamente de manifiesto por las investigaciones de la Guardia Civil, que en abril de 2019 revelaron la existencia de grandes instalaciones ilegales de desalobración construidas en el Campo de Cartagena de forma subterránea para permanecer ocultas, investigaciones que se saldaron con el sellado de 45 desalobradoras y 25 pozos y con 45 agricultores imputados<sup>2</sup>.

Por otra parte el diagnóstico que se realiza del estado y causas del episodio de mortandad masiva ocurrido en octubre 2019 contiene graves errores y carencias. Contrariamente a lo señalado por el EPTI, el episodio de mortandad masiva de octubre de 2019 no derivó de forma principal de la ocurrencia de la DANA de septiembre de 2019, ni de la entrada de agua dulce y sedimentos, ni la mortandad se debió sobre todo a la anoxia, sino que constituyó un episodio agudo de la situación crónica de eutrofización grave que se originó con la crisis eutrófica de 2016 y de la que el Mar Menor no llegó a salir en ningún momento. La DANA agravó la situación, pero no es la causa del episodio de mortandad masiva ocurrido en octubre de 2019. El problema no fue consecuencia de la entrada de agua dulce (aunque favoreció la formación de las dos capas de agua de diferentes salinidad y densidad), sino de los nutrientes arrastrados por el agua, que son el combustible del proceso eutrófico y que se sumaron a los nutrientes que ya contenía la laguna y que la mantenía en un situación de eutrofia profunda, si bien la gravedad del problema se manifestaba en los fondos y no era tan visible en superficie. De hecho, como recuerda AMETSE (Asociación Meteorológica del Sureste), los datos pluviométricos muestran que la avenida de noviembre de 1987 presentó una precipitación acumulada un tercio mayor que la DANA de este año, pese a lo cual en 1987 no hubo episodios de mortandad masiva en la laguna, al igual que en otros muchos episodios históricos de avenida.

Tampoco es correcta la afirmación del EPTI de que "La calidad de las aguas del Mar Menor se encuentra afectada por la alta concentración de nitratos de la masa subterránea Campo de Cartagena que descarga en él y que es consecuencia de la acumulación de nutrientes que desde hace décadas recibe el acuífero por infiltración principalmente de los retornos de riego de la agricultura". Sin duda la contaminación

por nitratos del acuífero del Campo de Cartagena afecta a la laguna, pero no es la principal fuente de entrada de nitratos a la laguna, como ha sido claramente demostrado por estudios recientes. Según el estudio de Tragsatec presentado en marzo de 2020 y disponible en la web del MITECORD, la entrada total subterránea al Mar Menor fue de 8,49 hm<sup>3</sup> para el año hidrológico 2018/2019, incluyendo el episodio de DANA. Este valor es muy inferior al estimado para la entrada superficial, en torno a los 35-40 hm<sup>3</sup> anuales de agua, de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Vertido Cero. Por tanto, la entrada por vía superficial es más de cuatro veces superior a la entrada por vía subterránea. Por tanto, la responsabilidad de los regantes actuales en la crisis eutrófica del Mar Menor y en el consiguiente colapso ecológico de la laguna no puede ser minimizada aludiendo a contaminaciones históricas acumuladas en el acuífero, aunque obviamente han tenido también un papel negativo.

### ***Acerca del Análisis de Alternativas***

Las carencias más graves de la Alternativa 0, relativa a las 100 medidas incluidas en el plan vigente, no es sólo su bajo nivel de ejecución, común a la generalidad de los Temas Importantes del EPTI, sino, sobre todo, que tales medidas están profundamente desenfocadas, algo que reconoce el propio EPTI. En la fecha de elaboración y aprobación del vigente plan hidrológico de la demarcación del Segura, era ya sobradamente conocido que la principal fuente de contaminación que estaba afectando a la laguna era de origen agrario y no urbano, pese a lo cual el plan vigente decidió mirar para otro lado y no aplicar medidas eficaces y de aplicación del principio quien contamina paga, para una reducción significativa de la contaminación por fertilizantes y plaguicidas procedentes de las actividades agrarias del Campo de Cartagena.

Por otra parte, la alternativa 1 resulta tremendamente poco ambiciosa en relación con las competencias en materia de aguas, ya que se limita a repetir la alternativa 0, es decir, a ejecutar las medidas incluidas en el plan hidrológico vigente, en su inmensa mayoría ni siquiera iniciadas. Además, la gran mayoría de las medidas incluidas en el plan vigente se refieren a obras hidráulicas de muy escasa incidencia a la hora de reducir la contaminación difusa agraria. Se trata de obras hidráulicas ligadas a la contaminación urbana, como las EDAR y los tanques de tormentas, que representan el 60% de las medidas. Como se ha dicho, a las medidas del plan vigente la Alternativa 1 añade medidas recogidas en instrumentos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El EPTI hace referencia a tales instrumentos y señala que los mismos incluyen medidas que no tienen correlación con ninguna de las del plan hidrológico, como es el caso de la restauración a su estado natural de las zonas de regadío no amparadas por derecho al uso de las aguas. Causa gran asombro que el plan hidrológico no contemple ninguna medida que tenga correlación con ésta, la cual está estrechamente relacionada con las competencias ostentadas por la Confederación Hidrográfica del Segura en materia de gestión del agua y control del Dominio Público Hidráulico.

La Alternativa 2 añade las medidas del denominado Plan Vertido Cero, desarrollado conjuntamente entre la Confederación Hidrográfica del Segura y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De la misma manera que en el caso de la



Alternativa 1, no existe ni un sólo estudio que demuestre que las medidas del Plan Vertido Cero, cuya inversión se concentra en obras hidráulicas, sean efectivas para la recuperación de la laguna. De hecho, el Plan Vertido Cero presenta enormes carencias, errores de concepto y genera dificultades y problemas añadidos:

- Existen enormes dudas acerca de que el proyecto Vertido Cero sea ambientalmente eficaz para alcanzar los objetivos previstos porque:
  - i) Las actuaciones priorizadas parecen traslucir una considerable confusión entre la gestión del agua y la gestión de los nutrientes. El objetivo debe ser el de evitar la entrada de nutrientes a la laguna con medidas de prevención en origen y de soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca y no el de dirigir las actuaciones hacia la disponibilidad de agua para el regadío.
  - ii) sus principales actuaciones, centradas en la captación de agua superficial y subterránea, impulso hasta las infraestructuras del Mojón y Arco Sur, desalobración, generación de agua para riego, desnitrificación y vertido al Mediterráneo, en lugar de optar por eliminar la contaminación en origen, constituyen medidas de “final de tubería”, las cuales como es sabido tienen muchas menos garantías de resolver los problemas. En efecto, con estas medidas de final de tubería cualquier accidente, rotura, incidencia técnica o las más que probables dificultades económicas de explotación y funcionamiento de las obras se traducirán en que tales obras no funcionen, de forma que los flujos de nutrientes iniciarán procesos de eutrofización (si llegan al Mediterráneo) o agravarán los ya existentes (si llegan al Mar Menor). Además, el propio funcionamiento en condiciones optimas (reducción del contenido en nitratos a 50 mg/l en las salmueras a verter, de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental del Vertido Cero) del sistema supondrá el vertido de 2.125 toneladas anuales de nitratos al Mediterráneo, afectando al LIC marino y degradando sus hábitats. De hecho el incremento de nutrientes está afectando ya negativamente a las praderas de Posidonia oceanica existentes cerca del Mar Menor.
  - iii) se repiten supuestas soluciones que ya han fracasado en el pasado, como las grandes infraestructuras construidas en los años 90 de gestión de los drenajes, del agua de riego y de las salmueras y nunca utilizadas, así como una visión de la dinámica de la cuenca meramente hidráulica, insensible a las funciones ambientales del agua en los sistemas naturales y ajena a los nuevos enfoques que de forma creciente se están implantando en toda Europa, que promueven las Soluciones Basadas en la Naturaleza y las Infraestructuras Verdes. La ausencia de una evaluación crítica de las medidas aplicadas en el pasado y de si alcanzaron o no sus objetivos, contribuye a que se siga perseverando en estas falsas soluciones.
- Existen enormes dudas acerca de que el proyecto sea económicamente eficiente en relación con la consecución de tales objetivos porque:
  - i) Una parte de los costes, en concreto los costes de explotación y mantenimiento, no han sido incorporados en el Proyecto Informativo en una parte significativa de las actuaciones. Tales costes son muy importantes en el caso de las obras de la nueva gestión hidráulica que se pretende

implantar (captación de agua, desalobración, desnitrificación y vertido al Mediterráneo), los cuales ascienden a más de 29 millones de euros anuales de explotación y mantenimiento (según el apéndice de análisis económicos del Proyecto Vertido Cero), a asumir por los regantes, con un coste estimado en torno a 0,44 €/m<sup>3</sup>, sin contar los costes de inversión ni los de distribución a parcela.

- ii) El proyecto no ha realizado un análisis coste-efectividad, con el fin de identificar y priorizar las medidas que más contribuyen a alcanzar los objetivos a un menor coste. Distintos estudios muestran que la recuperación de superficies de humedal natural tendría una relación coste-efectividad que duplica la de las obras hidráulicas de recuperación, bombeo y tratamiento de drenajes ejecutadas en los años 90 y que no llegaron a alcanzar los objetivos previstos.
- Existen enormes dudas acerca de que el proyecto sea socialmente equitativo porque:
  - i) En la descripción de las actuaciones no se incluye información acerca de cómo se van a distribuir los costes entre los distintos agentes y muy especialmente entre las administraciones públicas y los sectores económicos privados implicados.
  - ii) En particular no se aporta información acerca de cómo se va a garantizar la corresponsabilidad del regadío intensivo del Campo de Cartagena, de las actividades ganaderas y de otros usos económicos, a la hora de asumir parte de los costes de las distintas actuaciones del proyecto Vertido Cero, en aplicación del principio “quien contamina paga”, tal y como exigen las normativas europeas, así como del principio de recuperación de costes, en aplicación de la Directiva Marco de Agua.

Sin tales garantías, la experiencia dicta que de nuevo seremos todos los ciudadanos quienes pagaremos por reparar el daño causado, lo que constituiría una forma de premio al infractor y representaría una profunda falta de equidad social.

En definitiva, el proyecto Vertido Cero es un proyecto mayoritariamente obsoleto y anclado en el pasado en sus principales actuaciones, las cuales giran en torno a nuevas obras hidráulicas que ignoran la importancia de mantener y recuperar la funcionalidad de la dinámica hidrológica natural. Es también un proyecto temerario en las medidas que pretende ejecutar, por la magnitud de las incertidumbres que rodean a tales medidas, incertidumbres que afectan a la eficacia de las mismas, a la viabilidad de su funcionamiento, dados los elevados costes de explotación y mantenimiento y a la gravedad de los daños ambientales que potencialmente podrían generar. Todo ello, unido a la ausencia de un análisis coste-efectividad de las alternativas que justifiquen la idoneidad de las finalmente elegidas, así como la falta de información y de garantías en relación con la recuperación de costes establecida por la Directiva Marco de Agua, harán que el proyecto Vertido Cero sea difícilmente subvencionable con fondos europeos y que encuentre múltiples problemas en su tramitación y ejecución, incluidos los de carácter jurídico.

Frente a las medidas contempladas, centradas en la contaminación urbana (plan hidrológico vigente) y en obras hidráulicas que parecen confundir el objetivo de reducir la contaminación con el de proporcionar nuevos recursos hídricos al regadío (plan Vertido Cero), llama poderosamente la atención la ausencia de medidas directamente relacionadas con las competencias en materia de aguas, dirigidas a controlar las demandas de regadío y los usos del agua en el Campo de Cartagena y a recuperar a nivel funcional y ambiental el dominio público hidráulico, como componente fundamental para que la cuenca sea capaz de metabolizar sus propios nutrientes.

En concreto, el EPTI no incluye medidas específicas relativas a una auditoría del regadío del Campo de Cartagena, la apertura de expedientes a los regadíos sin derechos de uso del agua, la auditoría de todas las captaciones de agua y clausura de los pozos ilegales o extracciones por encima de lo autorizado, el control volumétrico del 100% de los usos del agua, el Deslinde y la recuperación ambiental y funcional del Dominio Público Hidráulico y la recuperación y restauración ambiental de las superficies de humedal natural.

### ***Propuestas de gestión integrada de la cuenca del Mar Menor para una recuperación real de la laguna***

Se requiere una sustancial reconversión ambiental del modelo productivo agrario del Campo de Cartagena, que pasa por la reducción en origen de la contaminación agraria a través de actuaciones a escala de explotación agraria, por la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza a escala de la matriz del paisaje agrario y por la recuperación y ampliación de las superficies de humedal natural, capaces de retener y eliminar nutrientes a escala de la cuenca.

#### ***1) Reducción en origen de la contaminación agraria con actuaciones a escala de explotación agraria***

- Es necesaria una detallada auditoría de todos los perímetros de regadío para identificar y eliminar los ilegales, ya sea por la normativa de aguas o por las normativas ambientales (por ejemplo, incumplir el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental).
- Se propone también crear una Banda Perimetral de Protección del Mar Menor, con una anchura media de al menos dos kilómetros, con eliminación de todas las superficies de regadío, destinando tales superficies a la recuperación de la vegetación natural, a la ampliación de las superficies de humedal natural y a la recuperación del paisaje tradicional de secano. Esta banda permitirá retener y eliminar buena parte de los nutrientes contenidos en los distintos flujos de la cuenca antes de que entren en la laguna, además de aportar múltiples beneficios ambientales y sociales, como la protección frente a las avenidas, la conservación de la biodiversidad, la mejora del paisaje y la contribución a la calidad de vida de las poblaciones ribereñas.
- En los regadíos situados en el resto de la cuenca, hay que establecer valores límite de obligado cumplimiento y más exigentes respecto a la normativa actual no sólo en la aportación de fertilizantes sino también en los contenidos en nutrientes de los lixiviados a escala de parcela o explotación agraria.

Igualmente debe establecerse de forma obligatoria sistemas de ciclo cerrado en los invernaderos.

- Es necesario garantizar el cumplimiento estricto de la obligación de dedicar al menos el 5% de la superficie de cada explotación agraria a vegetación natural capaz de retener y eliminar parte de los nutrientes agrarios. Se trata de una medida que ya existe, si bien de carácter voluntario, dentro del paquete de medidas agroambientales de la PAC. El grave deterioro ecológico de la laguna del Mar Menor por la entrada masiva de nutrientes agrarios justifica que dicha medida tenga en el Campo de Cartagena un carácter obligatorio.
- Deben prohibirse sin excepciones nuevas instalaciones intensivas ganaderas o la ampliación de las existentes y ha de aplicarse un plan de adecuación ambiental de todas las instalaciones, incluyendo la prohibición de aplicar purines en toda la cuenca.
- En aplicación del principio de quien contamina paga, se ha de imponer una tasa anual por hectárea por contaminación ambiental para toda actividad agrícola y ganadera en la cuenca. Dicha tasa debe tener un carácter finalista, dedicada a la recuperación del Mar Menor. Dicha tasa se modularía en función del tamaño de la explotación y del tipo de actividad agraria, incluyendo su exención total en el caso de la agricultura ecológica y los secanos tradicionales.

## *2) Actuaciones a escala de la matriz del paisaje agrario del Campo de Cartagena.*

A escala de la matriz del paisaje agrario se propone implementar soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de franjas de vegetación natural y setos, la creación de manchas dispersas de vegetación natural en el conjunto de la cuenca agraria y la recuperación y revegetación de la red de drenaje natural. Todas estas medidas actúan como áreas-tampón y trampas de retención de nutrientes y pesticidas en el conjunto del Campo de Cartagena. Se trata de medidas maduras, sobradamente conocidas, fácilmente implementables y en general de bajo coste. Múltiples trabajos indican que la recuperación de humedales es una medida más coste-efectiva que otro tipo de medidas como la captación de drenajes a través de infraestructuras de ingeniería civil para reducir la contaminación difusa en cuencas agrícolas

Estas medidas a escala de la matriz del paisaje agrario incluyen las siguientes:

- i) Deslinde urgente del Dominio Público Hidráulico, incluyendo barrancos, ramblas y resto de cauces naturales y líneas de drenaje;
- ii) Restauración ambiental y funcional del conjunto de la red de drenaje, con revegetación de sus lindes con especies autóctonas;
- ii) Creación de manchas de vegetación natural de forma dispersa en el conjunto de la matriz agraria, que contribuya a la retención y eliminación de nutrientes.

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza no sólo han demostrado su eficacia a la hora de retener y eliminar los nutrientes procedentes de la contaminación agraria, sino que aportan además múltiples beneficios adicionales, como retener el suelo y reducir las escorrentías, disminuyendo los daños por inundaciones, mejorar la calidad del paisaje y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad.

### 3) *Recuperación de las superficies de humedal natural en todo el perímetro de la ribera interna del Mar Menor*

En las proximidades del Mar Menor, dentro de la Banda Perimetral de Protección del Mar Menor, en la que se propone eliminar los regadíos, se debe recuperar y ampliar las superficies de humedal natural. Como las lluvias torrenciales de septiembre de 2019 demostraron una vez más, las avenidas constituyen una de las entradas de nutrientes a la laguna más importantes y justamente dicha entrada no puede ser gestionada ni reducida con obras de ingeniería civil, siendo los humedales el único mecanismo capaz de retener y eliminar tales nutrientes.

## 9. Sobre los ríos temporales

Buena parte de la demarcación del Segura tiene un clima semiárido, por lo que una proporción significativa de la red hidrológica está constituida por ríos y cauces temporales, como las ramblas. Estos ríos temporales presentan características y necesidades específicas en cuanto a conservación y gestión, pese a lo cual el EPTI no hace la menor referencia a la situación y retos que los numerosos ríos y cauces temporales de la demarcación del Segura plantean.

Uno de tales retos se refiere a la necesidad de fijar caudales ecológicos en los ríos temporales con metodologías adaptadas a las características especiales de estos ecosistemas. Se deberían mejorar principalmente dos aspectos: por un lado, el conocimiento de la relación río-acuífero y la aportación subterránea a los cauces. Por otro lado, es necesario modificar la determinación del caudal mínimo en estos ríos y cómo a partir de dicho caudal mínimo se debe construir la propuesta de caudales para el resto del año. En el caso de los ríos temporales, cuyo número puede aumentar si siguen las disminuciones de caudales con las previsiones de cambio climático, es necesario modificar o proponer nuevos métodos para el cálculo del caudal mínimo.

## 10. Sobre participación pública y coordinación entre administraciones

Una de las carencias más llamativas del EPTI es que no considere como Tema Importante las insuficiencias relativas a la gobernanza del agua en general y la participación y coordinación entre administraciones en particular.

En relación con los procesos de participación, éstos no tienen definidos ni establecidos elementos básicos de cualquier proceso de participación activa, como son:

- i) las condiciones de contorno del proceso participativo (sobre qué se participa, qué está abierto a discusión y qué no, cuáles son las alternativas en juego...);
- ii) la composición de los espacios participativos (partes interesadas presentes, mecanismos para garantizar una representación y participación adecuadas de todas las partes interesadas en igualdad de condiciones...);



- iii) los procedimientos para la discusión, deliberación y eventual elaboración de acuerdos;
- iv) el alcance de los resultados de la participación y, en su caso, de los eventuales acuerdos que pudieran emerger;
- v) los vínculos formales entre tales resultados y el proceso de elaboración del plan hidrológico
- vi) los vínculos formales entre el proceso de participación activa y los órganos formales de participación de la demarcación, en particular con el Consejo del Agua y su Comisión de Planificación.

Los procesos de participación activa deberían estar normados y con un claro encaje administrativo y jurídico, que dé respaldo al proceso de participación y establezca sus bases, incluyendo su alcance, objetivos específicos, condiciones de contorno, procedimientos internos y el modo específico en que sus resultados alimentarán el proceso de planificación.

Por otra parte debe superarse el actual modelo de mesas sectoriales (mesa agraria, mesa urbana, mesa ambiental...) y sustituirlo por un modelo basado en mesas temáticas de carácter inter-sectorial, con presencia del mayor rango posible de partes interesadas, en torno a distintos temas y problemas importantes (caudales ecológicos, aguas subterráneas, huertas históricas, Mar Menor, etc). Sin este carácter intersectorial, uno de los objetivos clave de la participación, como es mejorar la gobernanza, no puede ser alcanzado. Con el actual modelo de mesas sectoriales, cada sector se escucha a sí mismo y maximiza sus demandas sectoriales, lo que contribuye a enquistar posiciones y además supone mantener una relación exclusivamente bilateral entre cada uno de estos sectores y el organismo de cuenca, lo que en la práctica debilita la capacidad de influencia de la participación pública en la toma de decisiones.

Por otra parte, es imprescindible destinar suficientes recursos económicos al proceso de participación, así como contar con personal técnico altamente cualificado en participación pública, de forma que el proceso sea conducido de forma profesional de la mano de los expertos adecuados. Los procesos de participación pública están considerablemente infrafinanciados, en comparación con los beneficios que aporta y en comparación también con cualquier otro coste de los considerados en la planificación o en la implementación de las medidas previstas. Además, es necesario dedicar recursos técnicos y económicos para apoyar la participación, sobre todo de las partes interesadas con menos capacidades, como muchas asociaciones y entidades de la sociedad civil de pequeño tamaño.

En relación con la coordinación entre administraciones, aplicar medidas eficaces para la gran mayoría de Temas Importantes, si no para todos, requiere de una sustancial mejora de la coordinación entre las administraciones, en especial entre la Confederación Hidrográfica del Segura, competente en la planificación y gestión del agua, y las comunidades autónomas, competentes en materia ambiental y en las políticas sectoriales generadoras de las demandas hídricas, como la política agraria

o la turística. Hay que insistir en que la hoja de ruta para ir resolviendo la gran mayoría de los problemas identificados requiere pasar de las estrategias de oferta (conseguir nuevos recursos) actuando desde las competencias en gestión del agua de la Confederación Hidrográfica del Segura, a las estrategias de gestión de la demanda (necesitar menos agua), actuando desde las competencias en agricultura, turismo, ordenación territorial, urbanismo e industria de las comunidades autónomas. Esta coordinación es hoy por hoy muy deficiente o inexistente. Es imprescindible realizar un diagnóstico crítico de los mecanismos de coordinación actuales – o la falta de ellos – y proponer medidas para su mejora sustancial. Hay que recordar que aplicar la Directiva Marco del Agua y alcanzar y mantener el Buen Estado de todas las masas de agua es responsabilidad del conjunto de administraciones públicas, por lo que la coordinación entre las mismas constituye un imperativo, tanto en la propia elaboración de los planes hidrológicos como en su aplicación y en la gestión general del agua y de las políticas que afectan al agua.

La mejora de la coordinación entre administraciones ha de extenderse a todos los ámbitos de la planificación y gestión del agua, incluyendo, pero no limitándose a, el Comité de Autoridades Competentes (CAC). El CAC no está contribuyendo a resolver la falta de coordinación entre administraciones, constituyendo un órgano poco funcional y cuyo papel parece limitarse a cumplir con las exigencias formales de aplicación de la Directiva Marco del Agua, pero no sus exigencias de fondo, que son una mejor coordinación entre administraciones para una planificación y gestión integrada en aplicación de dicha Directiva. Tanto la composición como el funcionamiento actual del CAC han demostrado su ineficacia para alcanzar estos objetivos, por lo que es necesaria una reforma sustancial del CAC.

Por todo lo expuesto,

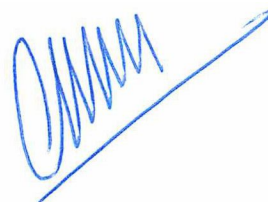
## SOLICITA

Que al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

1. Tenga por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones
2. Incorpore com mejor proceda dichas alegaciones en el documento definitivo del Esquema de Temas Importantes y en el borrador de Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura del tercer ciclo de planificación.

**En Murcia, a 15 de octubre de 2020**

Firma digital



**Fdo.: Ana María García Albertos. Presidenta**

*Esta solicitud se realiza al amparo de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y también, en base al Convenio de Aarhus, que entró en vigor el 29 de marzo de 2005, y mediante el cual se reconoce en su artículo 4 el derecho a que las autoridades públicas pongan a disposición del público las informaciones que les soliciten, así como a obtener copias de los documentos en que las informaciones se encuentren efectivamente consignadas, sin tener que invocar un interés particular y en la forma solicitada. Se dispone lo mismo en la Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE.*

